
ARTÍCULOS

EMPRESARIOS, TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN CHILE*

ALFREDO REHREN**

Este artículo plantea que la estabilidad de la transición y consolidación democrática chilena ha dependido, entre otros factores, de la confianza mutua y relaciones de armonía que los partidos políticos y las organizaciones empresariales lograron desarrollar entre el Plebiscito de 1988 y los meses inmediatamente siguientes a las elecciones presidenciales de 1989. El trabajo persigue dos objetivos. El primero trazar la evolución de las orientaciones de los grupos empresariales hacia los partidos políticos, coaliciones electorales y programas presidenciales para entender sus opciones ante la elección presidencial. El segundo, analizar el comportamiento del empresariado en la primera elección competitiva realizada en Chile después de diecisiete años de autoritarismo y durante el primer año del gobierno de la Concertación.

Se argumenta que por la posición privilegiada que los empresarios tienen en una economía de mercado, estos pasan a ejercer, en contraste con la democracia pre-autoritaria, una función pública, que iguala a aquella desempeñada tradicionalmente por la clase política. Se concluye que la redemocratización chilena no consiste solamente en la transición de un régimen político autoritario hacia uno democrático, donde se restauran y renuevan una tradición y prácticas políticas pluralistas, sino que por primera vez en la historia política de Chile, dado el éxito del modelo económico legado por el autoritarismo, existe la posibilidad real de la consolidación de una democracia capitalista.

* Este artículo es una versión revisada del informe final del Proyecto N° 91-0874 financiado por FONDECYT. Resultados preliminares fueron presentados en el XVII International Congress of the Latin American Studies Association, celebrado en Los Angeles, California, entre el 24 y 27 de septiembre de 1992, gracias a una ayuda de viaje brindada por CONICYT. Las opiniones, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y en nada comprometen a las instituciones antes mencionadas.

** ALFREDO REHREN, Ph. D. en Ciencia Política, Universidad de Texas en Austin. Profesor de Política Comparada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

Junto con el tradicional sistema multipartidista ha coexistido en Chile un estilo de intermediación de intereses de carácter funcional que ha sido estudiado por numerosos académicos. Esta tradición de «corporativismo social» según la cual las organizaciones empresariales han tenido un fuerte impacto en la formulación de las políticas públicas data de los últimos cincuenta años. Sus orígenes se remontan a la creación de la Cámara de la Producción y el Comercio en 1933, que agrupó a las entonces separadas Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Minería, Cámara de Comercio y grupos de interés regionales que deseaban una participación directa en la toma de decisiones del gobierno.¹

Un perceptivo analista escribió que estas asociaciones empresariales podían considerarse como un «sub-sistema político» y que «en la medida que los partidos políticos llegaran a ser menos representativos...lo más probable era que [ellas] fueran el principal vehículo público para defender sus intereses».² Como lo comprueban los hechos que llevaron a la caída de Allende en 1973, los grupos empresariales mostraron un alto grado de flexibilidad al desplazarse desde una defensa corporativa de sus intereses hasta la acción política abierta, sobrepasando en esa oportunidad el liderazgo histórico que tradicionalmente ejercieron los partidos políticos.³

Después de diecisiete años de autoritarismo los grupos empresariales no solamente se beneficiaron con las políticas neo-liberales implementadas por el gobierno militar, sino que además se alternaron entre

-
- 1 Ver H. E. Bicheno, «Anti-parliamentary Themes in Chilean History: 1920-1970,» **Government and Opposition** 7 (Summer 1972): 351-381; Ben G. Burnett, **Political Groups in Chile: The Dialogue Between Order and Change** (Austin: University of Texas Press, 1970); Jean Carrière, «Conflict and Cooperation Among Chilean Elites,» **Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe** 19 (Diciembre 1975): 16-75; José L. Cea, «La representación funcional en la historia constitucional de Chile,» **Cuadernos de Ciencia Política** 9 (Octubre 1976); Paul Drake, «Corporatism and Functionalism in Modern Chilean Politics,» **Journal of Latin American Studies** 10 (May 1978): 95-97; Crisóstomo Pizarro, **Políticas públicas y grupos de presión en Chile, 1965-1970: un análisis exploratorio**. Estudios Cieplan 26. Santiago: Cieplan, 1978; Peter Cleaves, **Bureaucratic Politics and Administration in Chile** (Berkeley: University of California Press, 1974); Robert R. Kaufman, **Transitions to Stable Authoritarian-Corporate Regimes: The Chilean Case?** Sage Professional Papers, Comparative Politics Series 1 (Beverly Hills: Sage, 1976).
 - 2 Constantine Menges, «Public Policy and Organized Business in Chile,» **Journal of International Affairs** 20 (1966): 343-365.
 - 3 Guillermo Campero, **Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento socio-político y orientaciones ideológicas** (Santiago: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1984).

económica de la población» están en sus manos.⁶ Su rol privilegiado es solamente igualado por aquel que cumple la clase política, pero con una gran diferencia: permanecen alejados de los controles democráticos y no deben responder ante el electorado al cabo del ciclo político. El dilema para la clase política es que debe responder democráticamente por sus políticas y al mismo tiempo acceder a la presión del empresariado cuyos intereses muchas veces están en conflicto con las demandas sociales del electorado. La solución de este conflicto se verá facilitada por la mutua percepción de que ambos grupos comparten el liderazgo en una democracia capitalista emergente.

Esta situación sintetiza la peculiar dinámica del proceso de redemocratización chileno. Este consiste no solamente en la transición de un régimen político autoritario hacia uno democrático, donde se restauran y renuevan una tradición y prácticas políticas pluralistas preautoritarias, sino que por primera vez en la historia política de Chile, dado el éxito del modelo económico legado por el autoritarismo, además se plantea la posibilidad real de la consolidación de una democracia capitalista .

LOS EMPRESARIOS Y EL PLEBISCITO DE 1988

La magnitud de la disminución del rol del Estado en la economía chilena, su apertura hacia el exterior, la implementación del Plan Laboral que atomizó y redujo a un mínimo la influencia del movimiento sindical y la privatización de la sociedad durante el régimen autoritario dejaron al empresariado, desde una perspectiva estructural, en una expectante posición de influencia política. Paralelamente, el empresariado experimentó forzosamente una «revolución ideológica» impuesta por el gobierno militar —un proceso de ajuste traumático y cargado de tensiones— al cabo del cual se terminó favoreciendo al mercado por sobre el tradicional Estado paternalista como mecanismo para la asignación de los recursos de la sociedad. Dicho cambio ideológico vino a reforzar los cambios estructurales ya operados bajo el autoritarismo.⁷

Según el calendario de la transición aprobado por la Constitución de 1980, el plebiscito a celebrarse en octubre de 1988 se percibió por el

6 Charles Lindblom, **Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems** (New York: Basic Books, 1977), p. 172.

7 Ver el excelente trabajo de Pilar Vergara, **Auge y Caída del neoliberalismo en Chile** (Santiago: FLACSO, 1985); Javier Martínez y Eugenio Tironi, **Las clases sociales en Chile: cambio y estratificación, 1970-1980** (Santiago: Ediciones Sur, 1985) y Arturo Fontaine A., **Los economistas y el Presidente Pinochet** (Santiago: Zig-Zag, 1988).

empresariado como un evento en que estaba en juego el «todo o nada» del modelo económico. A esto contribuyó la polarización política del país, las movilizaciones y violencia política desatadas como respuesta a la crisis económica de 1982 y el convencimiento de que el triunfo del NO significaría un desmantelamiento total de la institucionalidad política y económica construida por el gobierno militar por parte de las fuerzas que se agruparon en la Concertación de Partidos por el NO: «Llamamos a los chilenos a votar NO y así a derrotar a Pinochet y al régimen en el plebiscito».⁸

En este período las organizaciones empresariales dividen funcionalmente la representación de sus intereses corporativos y políticos. Si bien ambos ámbitos constituyen un todo inseparable, la expresión de estos últimos será delegada en instituciones de cúpula como la Confederación de la Producción y el Comercio y aquellas que tradicionalmente han tenido un peso político más gravitante como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Estas últimas aparecerán como las más decididas defensoras y continuadoras del modelo económico implementado bajo el régimen autoritario.

El Empresariado y la Concertación de Partidos por el NO

Los intentos de formar una oposición en bloque al gobierno autoritario –Alianza Democrática, Acuerdo Nacional, Asamblea de la Civildad– habían sido infructuosos hasta que se materializó la Concertación de Partidos por el NO en febrero de 1988. Según Ricardo Nuñez, líder del sector renovado del Partido Socialista, una oposición unificada no pudo hacerse efectiva antes «por las serias divergencias que han atravesado a la oposición y a la izquierda en relación al acuerdo sobre la institucionalidad democrática futura y a las formas de enfrentamiento del régimen». La Concertación emerge como respuesta a la imposibilidad de tener elecciones libres y al triunfo definitivo de la tesis de enfrentar al régimen dentro de sus propias normas y de acuerdo al itinerario establecido por la Constitución de 1980. Lo anterior se vio favorecido por un replanteamiento de la izquierda que estableció que para recuperar un papel protagónico en la construcción nacional, creyó indispensable «su reencuentro más allá de las fronteras que la definían en 1973» y al abandono por parte de la Democracia Cristiana del «camino propio» que

8 Declaración de la Concertación de los Partidos por el NO del 2 de febrero de 1988, en Patricio Aylwin, **Un Desafío Colectivo** (Santiago: Editorial Planeta, 1988), p. 134.

cargos corporativos y de gobierno, y tuvieron un acceso privilegiado a la Presidencia de la República, ya sea en forma directa o a través del Consejo Económico y Social⁴. El régimen autoritario–corporativo chileno tuvo un éxito incuestionable –comparado con las experiencias de otros países del Cono Sur– al dejar funcionando un sólido modelo de economía de mercado y al dejar a las organizaciones y cúpulas empresariales en una posición de poder inmejorable para representar sus propios intereses y defender los principios que sustentaban al modelo implementado por los militares.

Sin embargo, a pesar de que el sistema de partidos se destruyó en 1973, pavimentando el camino para que los militares tomaran el poder político y para que empresarios y técnicos asumieran un importante rol dentro del gobierno militar, los partidos políticos volvieron a emerger con nueva fuerza después del resultado del plebiscito de octubre de 1988. A pesar de que el resultado reflejó el deseo de un cambio de régimen y de gobierno (con énfasis en los bienes políticos), los partidos políticos enfrentaban fuertes demandas sociales de sectores socio–económicos bajos y medios.

Este artículo plantea que la estabilidad de la transición y consolidación democrática chilena depende fuertemente, entre otros factores, de la confianza mutua y relaciones de armonía que los partidos políticos y organizaciones empresariales logran desarrollar entre el Plebiscito de 1988 y los meses inmediatamente siguientes a las elecciones presidenciales de diciembre de 1989.⁵ Se persiguen dos propósitos. El primero es trazar la evolución de las orientaciones de los grupos empresariales hacia los partidos políticos, coaliciones electorales y programas presidenciales para entender sus opciones ante la elección presidencial. Especial énfasis

4 William E. Dugan y Alfredo Rehren, «Impacto del régimen político en la intermediación de intereses: instituciones públicas y grupos empresariales en Chile» *Política* 22/23 (junio 1990), pp. 117-136.

5 Se consideran tres períodos políticos: 1) Período pre-plebiscito, que se extiende desde la decisión de la Junta de Gobierno de nominar al General Pinochet como candidato hasta la realización del plebiscito (marzo-septiembre de 1988); 2) Período post-plebiscito, que se inicia con la derrota del General Pinochet y abarca la nominación de candidatos presidenciales (octubre de 1988-agosto de 1989) incluyendo la campaña presidencial y las elecciones presidenciales mismas (octubre-diciembre 1989); y 3) Período post-electoral inmediato y primer año de gobierno, que va desde la formación del nuevo gobierno hasta el establecimiento de un sistema de alianzas en el nuevo congreso que le permita implementar su programa político (enero 1990- marzo 1991). Estas etapas de la transición chilena, íntimamente relacionadas entre sí, revisten características y una dinámica propia que se desencadena con el triunfo del NO en octubre de 1988.

se pone en la percepción que los grupos empresariales tienen de los partidos políticos; su confianza en la calidad de liderazgo que les pueden ofrecer; su posición con respecto al rol que se les asigna en la formulación e implementación de las políticas públicas y su satisfacción con respecto al rol que el sector privado juega en la economía. El segundo propósito, e íntimamente relacionado con el primero, es analizar el comportamiento del empresariado en la primera elección competitiva a realizarse en Chile después de diecisiete años de autoritarismo y durante el primer año del nuevo gobierno democrático. A este respecto, y a pesar de que los grupos empresariales aparecen como un grupo homogéneo, interesa establecer el grado de consenso y conflicto que pueda darse entre ellos y cómo incide este último en las relaciones que sostienen con los partidos y el sistema de partidos, que a su vez, experimentan una profunda transformación en el proceso de transición.

Para capitalizar el apoyo recibido en el plebiscito, los partidos necesitaron recomponer el marco de las alianzas políticas a la luz de una interpretación del significado de tal triunfo y elaborar un programa de gobierno que lograra armonizar diversas posiciones ideológicas, y que respondiera además, a las fuertes demandas sociales producto de la implementación de políticas neo-liberales. Por otro lado, las organizaciones empresariales que se habían constituido en la principal fuerza política en la estructuración del nuevo modelo económico, demuestran un gran compromiso con él y se presentan como sus públicas defensoras. No cabe duda que las coaliciones políticas — Concertación de Partidos por el NO y Progreso y Democracia— que luchaban por mantener abiertas sus opciones electorales y controlar el futuro gobierno, tendrían necesariamente que tomar en cuenta el poder de un empresariado renovado y compatibilizarlo con los intereses de otros sectores y grupos sociales organizados.

El primer año de gobierno de la Concertación (1990–91) se analiza como una prueba de la naturaleza y dinámica de estas relaciones, las que se enmarcan en un contexto institucional y de procedimientos democráticos sustancialmente diferente al ambiente en que se han desarrollado en forma previa. Se postula que el acceso que los grupos empresariales logren a través de los partidos, como nuevos instrumentos de intermediación de intereses, en instancias decisivas para la formulación e implementación de políticas públicas, será clave para la estabilidad de la consolidación democrática.

Por su posición privilegiada en un sistema de economía de mercado, los empresarios pasan a ejercer, en contraste con la democracia pre-autoritaria, una especie de «función pública» donde el «trabajo, los precios, la producción, el crecimiento, el nivel de vida y la seguridad

imposibilitaba cualquier tipo de acuerdo con la izquierda. Debemos «disponernos a encontrar en conjunto con los demás partidos democráticos, *sin intenciones hegemónicas*... un candidato que personalice la propuesta democrática», afirmaba el recién electo Presidente de las Democracia Cristiana Patricio Aylwin en agosto de 1987.⁹ La Concertación de Partidos por el NO fue un triunfo del «núcleo consolidador» de la oposición que incluía fundamentalmente a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista–Nuñez y al Partido Radical, por sobre el «núcleo revolucionario» constituido por el Partido Comunista y el Partido Socialista–Almeyda que propiciaba la insurrección armada contra el régimen.¹⁰

Hasta el plebiscito el esfuerzo de la oposición estuvo centrado en «reducir los márgenes de incertidumbre de la población respecto del futuro» y en estructurar una coalición que incluyera un entendimiento entre los dos partidos ejes de la alianza opositora de centro–izquierda: la Democracia Cristiana y el socialismo moderado representado por el Partido Socialista de Nuñez.¹¹ Sin embargo, pese a la división del socialismo durante el régimen autoritario su futura reunificación fue siempre un tema recurrente. Provocaba dudas en el sector empresarial y de partidos que respaldaban el régimen militar la posición político–ideológica definitiva que tomaría dicho partido. También dentro de la oposición al régimen era probable esperar una alteración en la relación de fuerzas interna lo que podría provocar un cambio en la imagen moderada que se intentaba proyectar.

De modo que resolver este dilema parecía un requisito *sine qua non* para la estabilidad de la oposición como también para ganar la confianza de militares, empresarios, y partidos de derecha, los factores de poder que defenderían el legado autoritario ante un eventual triunfo de la opción opositora en el plebiscito. Su no resolución afectaría indudablemente la conducta del empresariado y las bases económicas en las que

9 Ricardo Nuñez, «Carta abierta a los dirigentes y militantes de la izquierda chilena» (17 de diciembre de 1986), en Ricardo Nuñez (comp.), **Socialismo: 10 años de renovación** (Santiago: Ornitorrinco, 1991), p.227 y 234. Entrevista a Patricio Aylwin, **Qué Pasa**, 6 al 12 de agosto de 1987, p. 42.

10 Los términos de «núcleo consolidador» y «núcleo revolucionario» fueron tomados de René Cortazar, «La no-transición a la democracia en Chile, y el Plebiscito de 1988», **Colección Estudios Cieplán** 22 (Diciembre de 1987), pp. 111-128; y Guillermo Campero y René Cortazar, «Actores sociales y la transición a la democracia en Chile», **Colección Estudios Cieplán** 25 (Diciembre de 1988), pp. 115-158.

11 Declaraciones de Edgardo Boeninger y Patricio Aylwin en **Cosas** No. 312, del 15 de septiembre, p.34 y No. 313 del 29 de septiembre de 1988, p. 27.

se sustentaría una transición exitosa. Líderes socialistas ya sostenían en 1986 que a pesar de que sería difícil contar con el mundo empresarial en lo que se denominó «concertación nacional para la reconstrucción», la derecha y el empresariado deberían jugar un rol activo.¹² No cabe dudas de que la evolución del sistema de partidos políticos chileno donde imperaban fuerzas centrífugas hacia uno de competencia moderada o centrípeto –basado en los consensos– fue durante el período pre-plebicitario un factor determinante para la transición.¹³

El temor del empresariado por las consecuencias de una derrota, que conduciría inevitablemente a la realización de elecciones libres y competitivas en el futuro inmediato, hacía que dicho temor, dadas las características político–ideológicas del conglomerado opositor, se extendiera también hacia el régimen democrático, lo que podía significar, eventualmente, la vuelta a una situación similar a la que llevó a la crisis de 1973. Es decir, democracia significaba para los empresarios un Estado intervencionista, políticas populistas, desequilibrios macroeconómicos y finalmente caos económico y político. Ante esta situación, el empresariado pasa de una posición subordinada políticamente a los otros integrantes de la coalición autoritaria –militares y tecnócratas– al ejercicio de un rol político mucho más activo y de clara identificación con el régimen vigente.

Ante los intentos de reemplazo de la fórmula plebicitaria por elecciones libres propiciados por la oposición, y respaldando los procedimientos sancionados en la Constitución de 1980, respecto del itinerario y mecanismos de la transición, la Confederación de la Producción y del Comercio sostiene en enero de 1988 que

los empresarios adherimos al proceso de avance hacia la plena democracia, en el entendido que no se reeditarán los vicios del sistema que llevó al país a la crisis política, social y económica de 1973....Este paso debe darse dentro del marco jurídico fijado por la Constitución de 1980....con la participación de todas las corrientes políticas que respeten la normativa constitucional y legal vigente.¹⁴

12 Ricardo Lagos, «Chile, tarea de todos», en Ricardo Núñez (comp.), **Socialismo: 10 años de renovación**, pp. 206, 214.

13 Ver M. A. Garretón, «La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno: un proceso de aprendizaje para la transición», en Marcelo Cavarozzi y M. A. Garretón (eds.), **Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el Cono Sur** (Santiago: FLACSO, 1989) y Angel Flisfisch, «Niveles de consenso y estabilidad democrática», en Adolfo Aldunate, Angel Flisfisch y Tomás Moulian, **Estudios sobre el sistema de partidos en Chile** (Santiago: FLACSO, 1985), pp. 173-207

14 Confederación de la Producción y del Comercio, «Las Instituciones Empresariales ante el Proceso de Transición a la Plena Democracia», **La Segunda**, 29 enero 1988, p. 3.

Comprometidos con el modelo económico los empresarios sostienen que el desarrollo económico «se logrará plenamente si permanece en el largo plazo el actual sistema de economía de libertad». Para ellos «las libertades políticas y económicas son inseparables y se sustentan mutuamente», por tanto, «nuestra comprensión y nuestro apoyo estarán a favor de quienes sustenten y compartan con nosotros los principios comunes de respeto a la libertad de emprender, a la propiedad privada de los medios de producción, a la acción subsidiaria del Estado, a la libertad de pensamiento, de trabajo y de asociación.»¹⁵

Para los empresarios las posiciones ideológicas de la clase política en el período pre-plebiscitario no habían evolucionado, a pesar de las profundas transformaciones que había experimentado la estructura socio-económica de la sociedad chilena. Estaban aún presentes rasgos que históricamente caracterizaron su pensamiento, como el estatismo, su desconfianza por el rol de la propiedad privada, el mercado y el empresariado como motor del desarrollo. Fernando Aguero, Presidente de SOFOFA, manifestaba en mayo de 1988 que el empresariado «no percibe en la oposición grupos políticos de centro o centro-izquierda que hayan incorporado a su pensamiento económico y social la idea que el mejor sistema económico es el social de mercado.» Simultáneamente, en un agresivo discurso pronunciado en la Sociedad Nacional de Agricultura, Manuel Feliú, Presidente de la Confederación, proclamó que ante la proximidad del acto plebiscitario los empresarios habían aprendido a creer en ellos mismos y no en las ilusas fantasías de partidos políticos que pugnan por destruir estos principios.¹⁶

Por otro lado, la fuerte identificación del empresariado con el gobierno militar; la existencia según la oposición de una excesiva concentración de la riqueza en manos de unos pocos grupos privados y una imagen deteriorada por su falta de solidaridad ante el costo social que implicó la puesta en marcha de políticas neo-liberales incidían en una evidente falta de legitimidad del empresariado ante sectores de la oposición y la opinión pública.¹⁷ A similares conclusiones llegó un

15 Ibidem.

16 **El Campesino** (mayo de 1988), p. 10; **Qué Pasa**, 12 al 18 de mayo de 1988, p. 35.

17 Ver la percepción negativa del sector empresarial hecha por el futuro Ministro de Hacienda, en Alejandro Foxley, **Chile y su futuro: un país posible** (Santiago: CIEPLAN, 1987), especialmente pp. 123-125 y Patricio Aylwin, **Un Desafío Colectivo** (Santiago: Editorial Planeta, 1988), publicado un mes antes del plebiscito. Acerca del impacto negativo de los grupos económicos ver Andrés Sanfuentes, «Los grupos económicos: control y políticas», en **Colección Estudios Cieplán 15** (Diciembre 1984), pp. 131-170 y Patricio Rozas y Gustavo Marín, **1988: el «Mapa de la Extrema Riqueza 10 años después»** (Santiago: CESOC/PRIES-CONO SUR, 1989).

diagnóstico elaborado por los propios empresarios en ENADE' 86 y la encuesta FLACSO de agosto de 1987, determinó que en un 68% los entrevistados estimaban que los empresarios «sólo buscaban beneficios personales sin importarles el país». ¹⁸ Asimismo, entre un 70 y 80% de 600 dueñas de casa entrevistadas entre el mes de Octubre y Diciembre de 1987 en diferentes sectores del área urbana Concepción-Talcahuano sostuvieron que los empresarios eran poco honestos, eran dueños de mucha propiedad, abusaban de los trabajadores y consumidores y tenían ganancias excesivas. Las opiniones tomadas a 484 trabajadores pertenecientes a 10 de las empresas privadas más importantes del área también fueron similares y fluctuaron entre los mismos rangos, excepto por los trabajadores que opinaron que en un 82% los empresarios abusaban de ellos. Sin embargo, llama la atención que un 77% de dichos trabajadores se opusiera a que su empresa fuera traspasada al sector público, lo que implicaba que la identificación con el sistema de empresa privada era ya bastante significativa. Por supuesto, esto no debía confundirse, concluye el trabajo de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, con una realidad concreta negativa en cuanto a las relaciones laborales. ¹⁹

Esta percepción negativa fue reforzada además, por la naturaleza y dinámica misma del acto plebiscitario, que reducía las posiciones a un antagonismo globalizante y aparentemente irreconciliables: «La prolongación del régimen seguirá impidiendo que los chilenos encontremos cauces civilizados para dirimir nuestras diferencias. Seguirá manteniendo las imposiciones arbitrarias, las exclusiones y un esquema de guerra y confrontación para favorecer a los ricos en desmedro de las mayorías». ²⁰ El escenario político que se abría para los empresarios con el plebiscito era evidentemente negativo.

La coalición opositora además de encontrarse por mucho tiempo en una crisis de organización y en búsqueda de mecanismos que articularan su heterogeneidad ideológica y de intereses partidistas, carecía de proposiciones programáticas concretas bien elaboradas, lo que sumado a las declaraciones de algunos sectores y de líderes opositores contribuía a una mayor confusión del sector empresarial. Según Orlando Saenz, ex-Presidente de la SOFOFA y activo opositor al

18 Ver Rodrigo Baño, «Acerca del sistema de partidos probable», Documento de Trabajo No. 407, FLACSO-Chile (Mayo 1989), p. 120.

19 Ver Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) y Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, **Imágen de la Empresa Privada en Chile** (Concepción, Enero de 1988).

20 Aylwin, **Un Desafío Colectivo**, pp. 103-104.

régimen de la Unidad Popular, la oposición no tenía «ni la claridad, ni la coordinación, ni la unidad que son necesarias para infundir confianza en la ciudadanía y convencerla de que es capaz de conducir una respuesta categórica a la Dictadura».²¹

Los empresarios y el «Compromiso Económico y Social por el NO»

Un estudio comparativo de las propuestas económicas de todo el espectro de los partidos políticos que abarcó hasta fines de 1987 concluye que «a medida que se avanza hacia la izquierda se reduce la independencia en la definición de asignación eficiente de recursos y manejo macroeconómico, y adquiere fuerza la idea de adecuar los criterios de acción en estas áreas a los objetivos distributivos». Agrega que los empresarios tienden a identificarse con la visión de la derecha (Renovación Nacional), especialmente por su compromiso con un esquema de mercados libres, las privatizaciones y por considerar que la expansión del Estado reduce la inversión privada. Tanto en el Partido Demócrata Cristiano como en el Partido Socialista (Nuñez), plantea el estudio, existiría espacio para incrementar la propiedad estatal sobre los medios de producción, pero para el primero dicha meta no sería tan prioritaria. Finalmente, en relación al gasto social del sector público, existiría coincidencia entre Renovación Nacional, el centro y la centro izquierda para aumentarlo.²²

El primer intento de formulación de un programa opositor fue el *Programa Básico de Gobierno* elaborado por los Partidos Demócrata Cristiano, Socialdemócrata, PADENA, Humanista, USOPO y la Unión Liberal Republicana a comienzos de 1988. Este no se caracterizó por una posición rupturista con las modernizaciones emprendidas por el régimen militar y en él se proponía otorgar un mayor rol al Estado, configurando «una economía mixta en que Estado y empresa privada se complementarían adecuadamente». Proponía terminar con las privatizaciones, revitalizar el rol de la Corporación de Fomento, disminuir el gasto de defensa, aumentar moderadamente el impuesto a las utilidades de las empresas para financiar el gasto social y realizar una profunda revisión de la legislación laboral. Para Edgardo Boeninger, coordinador de dicha iniciativa, el programa «partía de lo existente» y contenía «elementos de

21 **Análisis**, 7 al 13 de marzo de 1988, p. 31.

22 Jorge Marshall y Felipe Morandé, «Propuestas económicas, consensos y conflictos», en Manuel A. Garretón, editor, **Propuestas políticas y demandas sociales** vol II (Santiago: FLACSO, 1989), pp. 31-92.

continuidad, pero también modificaciones fundamentales». Similar en sus planteamientos fue la propuesta *Democracia y Cambio Socioeconómico* elaborada por el Partido Socialista Nuñez.²³

El *Programa Básico de Gobierno* intentó desarrollar una base de apoyo político en sectores empresariales, con miras a enfrentar el plebiscito de octubre. Sin embargo, fue calificado como «ambiguo» y falto de «garantías para la propiedad» por Manuel Feliú, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio y definido en similares términos por Nelson Radice, Presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria y Artesanado (CONUPIA), institución que agrupa alrededor de 35 mil pequeños industriales, quien además agregó que «el temor es de que haya un retroceso demasiado violento, que perjudique realmente el desarrollo del país».²⁴ Tanto el gran empresariado agrupado en la Confederación como el pequeño y mediano empresariado presentaban ante las propuestas opositoras un sólo bloque unido.

Según los datos que arrojó una encuesta a 600 pequeños y medianos empresarios de Santiago, realizada en Septiembre de 1987, la reacción de CONUPIA era predecible. Un 75% de los entrevistados se manifestó a favor de que «era mejor que las grandes empresas fueran privadas»; incluso, un 41% de aquellos empresarios que se autocalificaron como de izquierda y de centro-izquierda, mantuvieron la misma opinión. En dicha encuesta se reconocía que el aspecto más positivos de la política económica vigente era «el desarrollo de la libre empresa» y sólo el 1.2% mencionó las «privatizaciones de las grandes empresas» como un problema negativo, mientras el 40% de los entrevistados las consideró como convenientes (la cuarta parte de los empresarios de izquierda y centro-izquierda también las apoyaban). Respecto de la continuidad de la política económica en un futuro gobierno, el 60% opinó que «una política similar debería aplicarse después de 1989». En cuanto al impacto que tendría el gobierno de los opositores después de 1987, los pequeños y medianos empresarios opinaron que podría haber una estatización de las empresas (48%); reforma agraria (43%); huelgas y conflictos laborales (67%); y una «menor confianza y tranquilidad en el país» (53%).²⁵

Respecto de las orientaciones políticas de los pequeños y medianos

23 *Qué Pasa*, No. 874 (7 al 13 de enero de 1988); *Análisis* (29 de febrero al 6 de marzo).

24 *La Tercera*, 14 febrero 1988.

25 Ver Centro de Estudios Públicos, «Estudio social y de opinión pública entre pequeños y medianos empresarios de Santiago, Septiembre 1987», Documento de Trabajo No. 95 (Diciembre 1987).

empresarios, el mencionado estudio mostró que la falta de democracia era para ellos, frente al régimen autoritario, un problema menor. Sólo un 4.7% de los entrevistados lo mencionaron como problema, a pesar de que esta necesidad se sentía con mayor intensidad entre aquellos de tendencia izquierdista, a quienes además les preocupaba «no tener Congreso y Presidente elegidos». Cabe destacar que aunque la falta de líderes políticos era también para los pequeños empresarios un problema menor, sin embargo, para los empresarios de centro-derecha era un problema mucho más agudo que para aquellos de cualquier otra tendencia política. Así, «los empresarios que se posicionan del Centro hacia la Izquierda, en el espectro político, califican mejor a los dirigentes políticos que los que se posicionan del Centro hacia la Derecha». Esto último confirmaría la ausencia de un liderazgo político sólido en la Centro-Derecha y ayudaría a explicar el por qué de la férrea unidad empresarial detrás de sus líderes gremiales cuando emprenden en la víspera del plebiscito la campaña «Empresarios para el Desarrollo».²⁶

Esta actitud negativa con respecto a las diversas expresiones programáticas de la oposición, abarcaría además al más elaborado y consensual *Compromiso Económico y Social por el NO* del 10 de mayo de 1988, redactado por los 14 partidos firmantes de la Concertación, actitud que se mantendrá hasta el momento mismo de la realización del plebiscito. En su víspera Feliú hace públicas dos críticas al programa opositor: «hay una ambigüedad muy grande en los distintos programas y desconfianza muy grande en que se puedan poner de acuerdo los distintos grupos políticos para proyectar el país en lo económico».²⁷

En relación a la ambigüedad de los programas, la negativa reacción empresarial a las propuestas de la oposición se explica por el carácter antagónico del plebiscito que condujo inicialmente a la oposición a una crítica general de las políticas oficiales, a restituir el rol tradicional del Estado y a poner énfasis en el cambio de régimen más que en la proposición de políticas alternativas concretas. Por otra parte, sin embargo, se visualiza dentro de la oposición el abandono de modelos globales antagónicos y un firme deseo por alcanzar consensos programáticos. Estos últimos se refieren especialmente a la concertación social que se espera de los actores sociales más activos a fin de lograr una relación diferente en el equilibrio entre la asignación eficiente de los recursos (mercado) y los objetivos distributivos (gasto social) que persigue la política macroeconómica. Es decir, se pretende encontrar un

26 Ibidem.

27 **El Mercurio**, 4 octubre 1988.

equilibrio entre ambos ámbitos que sea definido por los propios empresarios y trabajadores y sin que medie la representación de los partidos en tales negociaciones.²⁸

Frente al Compromiso Económico y Social por el NO, más conocido entre los empresarios como las «21 Medidas», la Cámara Nacional del Comercio llama a «los sectores políticos a no forjar falsas esperanzas en la opinión pública, mediante programas o medidas que luego no podrán cumplirse...y que significarán el desprestigio de la democracia».²⁹

La Cámara Chilena de la Construcción guarda una posición más limitada a sus intereses sectoriales, menos crítica y más abierta frente al plebiscito. Declara respetar a todos los partidos que defiendan caminos democráticos ya que este régimen «es el mejor sistema para desarrollar la iniciativa privada» y «desaprueba todo esquema que atente en forma abierta o velada, contra el derecho de propiedad, subsidiaridad del Estado, o que ampare ideas que vayan en detrimento de la iniciativa privada o de la libre empresa».³⁰ Algunas de sus más influyentes personalidades advierten, sin embargo, que durante la Unidad Popular «las empresas constructoras fueron declaradas ‘artículos de primera necesidad’...y esto permitió intervenirlas».³¹

Para otras entidades como la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) que agrupa a la pequeña y mediana minería, la defensa de una economía de mercado y de la propiedad privada aparecen vinculadas a una activa intervención del Estado, que actúa como poder comprador y de fomento del sector a través de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). SONAMI se opone a la privatización de esta última ya antes del plebiscito, argumentando que tiene un carácter monopsónico. De privatizarse, sostiene SONAMI, debe trapasarse a los mineros a través del gremio. Con la derrota en el plebiscito, el gobierno militar agiliza las privatizaciones,

28 Manuel A. Garretón, «El estudio de las propuestas político sociales: una presentación general», en Manuel A. Garretón, editor, **Propuestas políticas y demandas sociales**, pp. 13-28.

29 **El Informativo Gremial** No. 8.180, 23 de mayo de 1988, pp. 13-14.

30 Exposición y discurso del Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Sr. Sergio Melo San Juan en la clausura del 99o Consejo Nacional de la Institución, celebrado en Copiapó el 27 de mayo de 1988 y con motivo de cumplirse el Consejo Nacional No. 100, respectivamente. **Boletín Estadístico de la Cámara Chilena de la Construcción** No. 187 (junio de 1988), p. 7, y No. 191 (octubre de 1988), pp. 5-10.

31 Conferencia Magistral de Modesto Collados N. ante la Federación Interamericana de la Construcción, **Boletín Estadístico de la Cámara Chilena de la Construcción** No. 193 (diciembre 1988), p. 10.

pero a través de un contacto directo con el Presidente Pinochet, SONAMI detiene la privatización de ENAMI. Incluso, logra que la Ley del Estado Empresario, tan deseada por el empresariado, y aprobada en enero de 1990, no afectara la existencia ni la estructura de esta empresa. Este sector, comparado con otros sectores empresariales, demuestra rasgos de un carácter más corporativo, que lo llevan a apoyar un Estado más intervencionista.³² Por ende, su mayor afinidad con los planteamientos de la oposición en torno a lograr una Economía Mixta, de amplia colaboración entre el sector privado y un Estado que debe retener ciertas actividades productivas.

Para SOFOFA, uno de los grandes problemas que escondía el programa opositor era determinar justamente el futuro rol del Estado en la economía. El cuestionamiento que hacen los partidos al aceleramiento de las privatizaciones que emprende el régimen después de la derrota del plebiscito y ante eventuales irregularidades, no tiene sino por objetivo evitar, según SOFOFA, que el Estado renuncie a «una fracción importante de su poder» y permita así en el futuro «que se consolide el Estado empresario en sectores donde debe cumplir sólo un rol subsidiario».³³

El ejemplo más extremo de oposición al programa de la Concertación lo constituye la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que se identifica políticamente con el gobierno militar y aparece como la más decidida defensora de su obra. Durante su período se regularizó la propiedad agrícola, devolviéndose la mayor parte de las tierras expropiadas por la Unidad Popular a sus dueños; se puso término a la intranquilidad laboral en los campos al terminar con las huelgas; y se disminuyó la presión de los sindicatos campesinos al liberalizarse el mercado laboral según las pautas establecidas en el Plan Laboral. Finalmente, se derogó la Ley de Reforma Agraria poniendo fin a un proceso que «generó el caos, la violencia y la ruina de la agricultura».³⁴

A pesar de la moderación de las palabras del vocero de la Concertación, Patricio Aylwin, estas no lograron infundir en la SNA mayor confianza: «Reconocemos la iniciativa individual, la propiedad privada y el dinamismo empresarial como una herramienta esencial e indiscutible para impulsar el desarrollo». Dicha afirmación, en boca de quien fue gestor de la redacción de la Ley de Reforma Agraria, proceso

32 Ver **Memoria SONAMI 1988**; **Minería Chilena** No. 87 (julio de 1988), p. 29; y editorial de la misma revista de octubre de 1988, p. 5.

33 **El Mercurio**, 21 de enero de 1989 y 17 de diciembre de 1988, pp. B12 y B1 respectivamente.

34 **El Campesino**, editorial (Julio 1988), p. 3.

que antagonizó a la SNA y a todo el sector empresarial con el gobierno de la Democracia Cristiana en la década de los sesenta, carecía de credibilidad.³⁵ Sin embargo, Aylwin reconoció que, a pesar de ser uno de los redactores de la Ley de Reforma Agraria, «hoy por hoy hay una mentalidad empresarial en el sector. En consecuencia, una reforma agraria, entendida como proceso de expropiación no se justifica o contempla».³⁶ Pero apareciendo la Democracia Cristiana aliada en la Concertación de Partidos por el NO con todos los sectores que integraron el Gobierno de la Unidad Popular (excepto el Partido Comunista), y respaldando el desarrollo de «modalidades alternativas de propiedad» ya que «la gran empresa está lejos de constituir la única forma posible de propiedad privada», no era de extrañar entonces que la SNA advirtiera que «si retornamos a las añejas y fracasadas posiciones de antaño, el sector agrícola volverá a vivir los difíciles momentos por los que atravesó en el pasado.»³⁷ En consecuencia, todas las organizaciones empresariales del agro mostraron a lo largo del país gran unidad y prestaron su infraestructura y un activo apoyo a la campaña de los «Empresarios por el Desarrollo» llevada a cabo por la Confederación de la Producción y del Comercio.

A la falta de confianza en las acciones políticas de la Democracia Cristiana, se sumaba una doctrina política donde la propiedad privada y el mercado nunca gozaron de claras simpatías. Sólo durante el IV Congreso Ideológico de noviembre de 1991 se reconoció oficialmente el rol del mercado y de la propiedad privada y en un proceso de remozamiento más que de renovación, se apoyó abiertamente una economía social de mercado. En dicho Congreso se opta por «una economía solidaria, participativa y de mercado» donde «la solidaridad es el principal orientador de la sociedad y el mercado el más eficaz instrumento de asignación de recursos de la economía». Pero para el ideólogo de la DC, Jaime Castillo, esta había sido siempre la posición doctrinaria Demócrata Cristiana, donde se conjugó la «libertad económica con el concepto de justicia social....eso que se han dado en llamar Economía Social de Mercado».³⁸

Solamente veinticinco años después del último Congreso Ideológico de 1966, donde se acuñó el término «socialismo comunitario» como

35 Ver Patricio Aylwin, **Un Desafío Colectivo** (Santiago: Editorial Planeta, 1988), p. 83 y «Compromiso Económico y Social por el NO» en pp. 137-143 del mismo libro.

36 En entrevista a **Qué Pasa** (6 al 12 de agosto de 1987), p. 41.

37 Sociedad Nacional de Agricultura, «Memoria de Actividades 1988» en **El Campesino** (Diciembre 1988), p. 45 y 51.

38 **El Mercurio** (10 noviembre 1991), pp. D6-D7;

ideal de organización económica que dio paso posterior a la «vía no capitalista de desarrollo», ahora y en forma bastante ambigua viene la DC a revalorar el mercado, en una conceptualización que de acuerdo a los dirigentes empresariales es difusa y difícil de operar en la práctica. Lo que realmente distingue la actual posición DC es que «antes tuvimos una visión peyorativa del empresariado....Y, ahora, claramente, el partido les ha dicho que confía y espera mucho de ellos, que creemos en el sector privado».³⁹ Tanto es así, que sólo entonces se crea un departamento empresarial destinado a coordinar los empresarios simpatizantes del Partido.

Sin embargo, en este período, la crítica empresarial se desplaza desde la ambigüedad programática hacia la incapacidad de la oposición para presentar un equipo económico coherente que de signos de tranquilidad. Esta situación contrasta con la total confianza que les merece a los empresarios la política económica del gobierno militar bajo la eficiente conducción del Ministro Hernán Büchi. Son las aclaraciones a algunos interrogantes por parte de los «Economistas por el NO», a través de destacados personeros como Alejandro Foxley, y simultáneamente, el cambio de posiciones que comienza a percibirse en sectores técnicos de la izquierda socialista, que conducirán a la pérdida al miedo del plebiscito y al afianzamiento técnico de la Concertación en el ámbito empresarial en el mediano plazo.

Los líderes y técnicos socialistas sostienen que sin negar que «las relaciones del sector empresarial con la oposición son todavía distantes», los empresarios «tendrán que modificar su actitud» puesto que «afortunadamente en la mayoría de los partidos de oposición sí ha habido un cambio de perspectiva.» Se critica la gestión económica del gobierno de la Unidad Popular y se considera la propiedad privada como un elemento «imprescindible para desarrollar el espíritu creativo»; se agrega, además, que «ninguna mayoría transitoria puede alterar aspectos tan fundamentales de la convivencia como es este derecho».⁴⁰ En un reciente trabajo

39 Ver el documento de Andrés Zaldivar L., Presidente de la DC, «Nuestra identidad es nuestro proyecto» preparado para el Congreso; **Revista Cosas** 395 del 12 noviembre 1991, pp. 8-10 y **Análisis**, 11-24 noviembre 1991, pp. 10-12.

40 Ver entrevista a Carlos Ominami, economista del Partido Socialista-Núñez en **La Epoca**, 10 abril 1988; entrevista a Ernesto Edwards en **La Segunda**, 30 junio 1988; y a Enrique Dávila, economista socialista, integrante de la Comisión de Economistas Socialistas, en **Cosas** No. 299, del 17 marzo 1988. Mayores antecedentes pueden encontrarse en Sergio Bitar, Ernesto Edwards y Carlos Ominami, **Cambiar la vida** (Santiago: Melquiades, 1988); Sergio Bitar, **Chile para todos** (Santiago: Planeta, 1988) y Ricardo Núñez (comp.), **Socialismo: 10 años de renovación** (Santiago: Ornitorrinco, 1991).

se sostiene que el exilio de muchos técnicos e intelectuales socialistas en Europa, donde tuvieron contacto con los socialismos reales y las experiencias Social Demócratas con prácticas consensuales, impactaron decisivamente en la revaloración de sus postulados económicos y ayudaron a la renovación socialista.⁴¹

Efectivamente, dos meses antes del plebiscito Fernando Agüero sostiene «que si un socialista como Carlos Ominami fuera Ministro de Hacienda aplicaría un modelo económico más cercano del de Büchi que del que aplicó Pedro Vuskovic.»⁴² Curiosamente, mientras las declaraciones de los políticos de oposición son contradictorias, las de los economistas infunden tranquilidad, produciéndose un incipiente consenso técnico entre empresarios y técnicos de la Concertación. La agrupación de Economistas por el No declara el 7 de octubre que «El país necesita un manejo macroeconómico disciplinado».⁴³ Lentamente, comienza a gestarse un entendimiento que será vital durante el primer año de gobierno de la Concertación y se cumple lo que Manuel Feliú esperaba: «Los intelectuales y políticos de izquierda y centro izquierda suelen culpar a la empresa privada del retraso de Chile.... [pero] siempre nos relacionaremos con ellos alentando la esperanza de que lleguen a compartir nuestra enorme fe en la libertad y en la empresa privada.»⁴⁴

El comportamiento político de los empresarios frente al plebiscito

Si bien ciertos grupos empresariales se organizan a mediados de 1987 a través de los «Comités Cívicos» para apoyar la candidatura del General Pinochet, y un reducido grupo crea con posterioridad «Empresarios por la Democracia» para apoyar a la oposición, el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio llama a los empresarios a incorporarse a los partidos políticos «que defienden las ideas que permitan que funcione la empresa privada». Asimismo, al Presidente de SOFOFA, le parece muy importante que los empresarios influyan «sobre las distintas opciones de poder» para defender el sistema social de

41 Patricio Silva, «Social Democracy, Neoliberalism and Ideological Change in the Chilean Socialist Movement, 1973-1992,» trabajo presentado en el XVII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), Los Angeles, California, September 24-27, 1992.

42 **Apsi** 263, del 1 al 7 de agosto de 1988, p. 43.

43 **Apsi** 273, del 10 al 16 de octubre de 1988, p. 26.

44 Manuel Feliú, **La empresa de la libertad** (Santiago: Zig-Zag, 1988), pp. 91 y 115.

mercado ya que si no lo hacen, «no lo harán ni los diputados, ni los senadores...».⁴⁵

Antes las opciones políticas abiertas por el plebiscito los empresarios se mantienen a la expectativa, a la espera de lo que decida la Junta de Gobierno. Inicialmente se cobijan bajo el liderazgo político del régimen argumentando que «si la Junta de Gobierno propone al Presidente Pinochet para que sea candidato en una elección informada, responsable y realmente democrática, nosotros sí estaríamos absolutamente de acuerdo en apoyarlo».⁴⁶ Sin embargo, las organizaciones empresariales no se pronuncian oficialmente en el debate que se abre con posterioridad acerca de la nominación del candidato, sobre cuyo nombre aparecen posiciones encontradas entre los partidos políticos que apoyan al régimen. Mientras la Unión Democrática Independiente (UDI) apoya la nominación del Presidente Pinochet, sectores importantes de Renovación Nacional ven como inconveniente tal designación ya que le da al plebiscito «un carácter confrontacional», donde «más que estar eligiendo un candidato a Presidente, se está poniendo en juego un sistema». El ideal es proyectar «despersonalizadamente la obra del gobierno» a través de «un candidato distinto al General Pinochet».⁴⁷

En la medida que se acerca la fecha del plebiscito, las principales organizaciones empresariales también empiezan a tomar distancia del candidato oficial del gobierno – en una aparente posición de neutralidad política – y se identifican más bien con el modelo económico. El Presidente de SOFOFA afirma que «no vamos a adoptar una posición activa frente al Si o al No» porque «creo que habrá estabilidad en las dos alternativas», e incluso piensa que es posible que «gane el Si con un candidato distinto del Presidente Pinochet». Asimismo, Guillermo Feliú no cree que «el triunfo del Si o del No signifique que el grupo vencedor haya ganado una guerra».⁴⁸

Finalmente, esta aparente coincidencia entre sectores importantes de Renovación Nacional y la dirigencia empresarial para nominar a un candidato civil de la Derecha fracasa. En parte, debido a la inexistencia

45 Ver entrevista a Jorge Fontaine, en **El Mercurio**, 9 agosto 1987; declaraciones de M. Feliú en **El Mercurio**, 14 agosto 1987, p. C8; La Segunda, 9 septiembre 1987, p. 10; **La Epoca**, 1º noviembre 1987, p. 16.

46 **La Epoca**, 29 noviembre 1987, p.32.

47 Ver entrevistas a Andrés Allamand, Vicepresidente de Renovación Nacional y a Alberto Espina, miembro de la Comisión Política, en **Cosas** No. 299 (17 de marzo 1988) y No. 304 (26 de mayo de 1988) respectivamente.

48 **Hoy**, No. 559 (4 al 10 de abril de 1988); **Cosas**, No. 303 (12 mayo 1988); **APSI**, No. 263 (1 al 7 de agosto de 1988).

de una coalición política que lo apoye, y fundamentalmente, por la nominación del Presidente Pinochet, como candidato por la Junta de Gobierno a fines de agosto de 1988, hacia quien el sector empresarial muestra una gran lealtad.

La retirada empresarial hacia una defensa del modelo de economía de mercado se explica por su convencimiento de que su posición institucional de poder reside en la sustentación de dicho modelo y no en el resultado incierto de un plebiscito, ni mucho menos en las características político-partidistas del futuro gobierno. En la medida en que los valores que sostienen dicho modelo estén asegurados y se garantice la libre iniciativa frente a un Estado subsidiario, los empresarios gozarán de una posición de influencia ante los líderes políticos.

Esta premisa adquiere aún mayor relevancia considerando la crisis que vive el partido que aparecía como su aliado natural más inmediato y más representativo: Renovación Nacional. Según Feliú, este era a fines de 1987, el «único partido» que se había planteado claramente a favor de «la economía abierta, libertad de mercado y de respeto irrestricto a la propiedad privada».⁴⁹ Su división antes del acto plebiscitario (Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional), fue un serio golpe a la credibilidad de la derecha política ante los empresarios. Como manifestara el presidente de la SOFOFA «el triste espectáculo que han dado distinguidos políticos de Derecha» por luchas internas de poder desilusiona a los empresarios y «no negamos la posibilidad de que llegue el momento en el cual por surrogación tengamos que adoptar posiciones políticas frente a la inexistencia de un partido político que nos represente».⁵⁰

En este contexto, por consiguiente, no es extraño que los empresarios hubieran optado por emprender su propia «Batalla por las Ideas» la que se concreta en el movimiento «Empresarios por el Desarrollo» cuando se suscribe el «Compromiso por la libertad» de junio de 1988: «la promoción, difusión y fortalecimiento de la libre empresa constituyen una obligación del empresariado privado».⁵¹ Al mes siguiente, en un

49 **La Epoca**, 29 diciembre 1987, p. 32.

50 **Hoy** No. 559, del 4 al 10 de abril de 1988, p. 22; **Qué Pasa**, 12 al 18 de mayo de 1988, p. 35. Para un análisis de la evolución de la derecha política y de sus relaciones con el régimen militar y la oposición, ver Andrés Allamand, **Discursos, entrevistas y conferencias** (Santiago: Editorial Andante, 1989) y Tomás Moulián e Isabel Torres, **La Reorganización de los Partidos de Derecha entre 1983 y 1988**, Documento de Trabajo No. 388, FLACSO (Noviembre 1988).

51 Ver Manuel Feliú, **La empresa de la libertad** (Santiago: Zig-Zag, 1988), p. 19.

seminario con dirigentes empresariales de toda América Latina, organizado por SOFOFA en Santiago, Michael Novak, prominente pensador afiliado al conservador American Enterprise Institute, advierte a los empresarios que «estarán cometiendo suicidio colectivo si sólo se preocupan de los negocios: tienen que crear las condiciones de libertad, tanto en el sistema político como en el sistema moral-cultural dentro del que viven y actúan». ⁵² En este movimiento los empresarios asumen institucionalmente una agresiva defensa del modelo económico y se proyectan como un actor socio-político independiente del gobierno militar y de sus tradicionales aliados de Derecha. ⁵³

No deja de ser interesante resaltar que la argumentación empresarial en defensa de la propiedad privada se base en su dinamismo y creatividad para superar la miseria, planteamiento hecho por Su Santidad Juan Pablo II a los empresarios en su visita a Chile durante 1987. Existe un claro intento por vincular el desarrollo del capitalismo democrático en Chile al contexto moral-cultural que provee el catolicismo, tal como lo ha sostenido en sus obras Michael Novak. ⁵⁴

El impacto de la derrota del plebiscito

La derrota del plebiscito fue atribuida a varios factores. Se reconoció, en primer lugar, que fue un error ir «con el Presidente Pinochet a la

52 Michael Novak, «Las responsabilidades morales, culturales y políticas de las empresas», en SOFOFA, **El sector privado y la libre empresa en el desarrollo de América Latina** (Santiago, Julio 1988), p. 64. Los tres tomos con las ponencias de todos los dirigentes empresariales del resto del continente constituyen una valiosa información. Este seminario, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos, representó, además, otro esfuerzo del Gobierno de los Estados Unidos para contactarse y apoyar a otro actor clave de la transición, al tiempo que lo hacía simultáneamente con los partidos de oposición al régimen militar.

53 Un pionero esfuerzo de difusión de los principios de la empresa privada a nivel regional, previo a este, fue realizado por la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción durante 1987. En conjunto con el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) de la Cámara de Comercio de Washington se realizaron siete foros en las ciudades más importantes del país con la participación de empresarios, técnicos y políticos de oposición. Su objetivo fue «asentar un sistema de Empresa Privada, sólido y estable...que fortalecido recíprocamente con una democracia libre, duradera y estable conlleve al progreso y bienestar de todos los chilenos». Ver Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción y Centro Internacional para la Empresa Privada, **La Empresa Privada: Factor Esencial de Desarrollo en una Democracia Estable** (Concepción, 1987), p. 5.

54 Ver Michael Novak, **The Spirit of Democratic Capitalism** (New York: Simon & Schuster, 1982) y su reciente artículo «El capitalismo correctamente entendido: la visión del humanismo cristiano», **Estudios Públicos** 48 (Primavera 1992), pp. 29-59.

cabeza» porque evidentemente la imagen de demócrata que trató de proyectar el Presidente no era adecuada a la nueva etapa que se iniciaba. En segundo lugar, los efectos negativos del régimen militar en el ámbito de los derechos humanos y la falta de libertad política también fueron importantes. Pero un alto costo tuvo el excesivo énfasis en los logros macro-económicos del modelo en la campaña del gobierno que descuidó una situación social dramática para muchos sectores y familias de clase media y estratos bajos que se sentían amenazados con el continuismo del régimen. Corroborando esto último Manuel Feliú reconoció que la gran mayoría de los chilenos «está de acuerdo con el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Lo que pasa que ese crecimiento evidentemente no ha llegado a todos los sectores». ⁵⁵

Ante la derrota, incluso para el Presidente de la SNA era inminentemente necesario demostrar las bondades del sistema económico a través de una verdadera 'Validación Social' de sus planteamientos: «como expresión concreta de solidaridad debemos procurar dotar del mayor bienestar posible a nuestros colaboradores, reconociéndoles en justicia su participación en los logros alcanzados en el seno de cada unidad productiva...» ⁵⁶

Encuestas de opinión pública demostraron que estas apreciaciones eran correctas y que la campaña del «Si» fue mal llevada, ya que dicha opción se deterioró rápidamente en los últimos dos meses previos al plebiscito. La opción por el NO entre los estratos socioeconómicos medios y bajos, aumentó de un 44% y 38% en junio hasta un 51% y 55% respectivamente en septiembre de 1988. La encuesta CEP-Adimark de septiembre estableció que el 72% de quienes tenían motivos para votar «No» lo hacían por motivos económicos; que el 57% lo hacía por motivos relacionados con los derechos humanos y falta de libertad; y sólo el 39% lo hacía «por desaprobación al gobierno o a la persona de Pinochet». ⁵⁷

Tanto la evaluación empresarial como las encuestas de opinión pública corroboran la hipótesis de que el proceso de acumulación de capital en que se sustentó el crecimiento económico bajo el autoritarismo, no indujo a sus principales actores, los empresarios, a transformar

55 **Ercilla**, 14 de diciembre de 1988; **APSI**, 274 del 17 al 23 de octubre de 1988; **El Mercurio**, 22 octubre 1988.

56 Discurso del Presidente de la SNA, José Moreno en la Inauguración de FISA' 88, **El Campesino** (Noviembre 1988), p. 30.

57 Ver Roberto Méndez, Oscar Godoy, Enrique Barros y Arturo Fontaine «¿Por qué ganó el No?» **Estudios Públicos** 33 (Verano 1989), pp. 83-134.

automáticamente en beneficios sociales el producto de dicho crecimiento. El «trickle down effect» que se supone sustenta en gran medida el mejoramiento de los niveles de vida de la población en una democracia capitalista, donde el Estado solo cumple una función social secundaria, no funcionó bajo el autoritarismo. Los empresarios no desarrollaron una conciencia social ni distribuyeron por sí solos los beneficios del crecimiento para que se alcanzara la «validación social» del modelo. No sometidos a una influencia ni controles democráticos de un sistema de partidos e intereses sociales representados en el Congreso, los empresarios chilenos sólo consiguieron revalorizar en nuestra cultura política la propiedad privada como base esencial del crecimiento. Ahora, tendrían que demostrarlo en un régimen democrático.

Como los líderes empresariales lo habían previsto, un escenario donde triunfara el NO, los obligaría a negociar para poder convivir con la nueva coalición política dominante.⁵⁸ Por otro lado, para la oposición este era el único escenario en que los empresarios estarían dispuestos a entablar conversaciones con los sectores laborales. Es así que los empresarios establecen rápidamente consultas con ellos y los invitan al «Primer Encuentro de Integración Empresarios y Trabajadores» de diciembre de 1988 al que asiste la Central Democrática de Trabajadores. La CUT, cuyos dirigentes estaban relegados, se marginó del encuentro. Mientras los trabajadores insisten en la «concertación social», que involucra a trabajadores, empresarios y Estado, los empresarios prefieren hablar de «integración social» excluyendo el intervencionismo estatal. En el encuentro Manuel Feliú abre ya las posibilidades de «perfeccionar» la legislación laboral.⁵⁹

Pero los resultados del plebiscito, con un 56% para la oposición y un 44% para el candidato del régimen fueron un condicionante de moderación para la Concertación de Partidos por el No. Si bien el régimen fue derrotado, las cifras muestran que existía un importante apoyo en su favor; aún descontando aquellos sectores que se oponían al candidato nominado por la Junta de Gobierno, este no podía ser

58 El estudio de terreno de Nicolás Flaño y Gustavo Jimenez, **Empleo, Política Económica y Concertación ¿Qué opinan los Empresarios?** (Santiago: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1987), p. 132 concluía que «los empresarios nacionales tienen, claramente, un interés sustantivo en un proceso de concertación».

59 **Qué Pasa** No. 294 del 22 al 28 de diciembre de 1988, pp. 36-37. Un primer encuentro con dirigentes pro-régimen se había efectuado en mayo de 1987 en las Termas de Jahuel.

menospreciado.⁶⁰ Esta situación favoreció a aquellos sectores más moderados dentro del arcoiris opositor –donde aún se sustentaban concepciones estatistas y socializantes– e incidió en la elaboración posterior de las proposiciones definitivas del Programa de Gobierno de la futura Concertación de Partidos por la Democracia.

En un proceso de transición a la democracia uno de los aspectos más importantes es la incertidumbre que se genera entre los actores sociales y políticos acerca de cómo se estructurarán las relaciones de poder. No cabe dudas que lo empresarios no aceptan para el plebiscito la menor alteración del modelo económico implementado bajo el autoritarismo. Ahora bien, si la consolidación de un régimen democrático significa en definitiva la institucionalización de cierto grado de incertidumbre, los empresarios después del plebiscito aceptan la democracia, preparándose para minimizar los cambios en el modelo económico, argumentando que mercado y democracia son inseparables.

Por su parte, para la oposición «la perdurabilidad del modelo económico es, pues, la primera garantía que la democracia tendría que asegurar al empresariado» ya que hay «factores» ideológico-culturales que pesan sustantivamente en el balance favorable de los empresarios a la continuidad de la «obra» del régimen». En ENADE '88, el futuro Ministro de Hacienda planteó a los empresarios que «el país tiene que partir desde donde está...con un rol principal para el mercado...con un sector privado que puede desarrollar su labor sin temor a expropiaciones...» y buscar «ámbitos propicios para la construcción de acuerdos entre empresarios y trabajadores sin la intervención del Estado».⁶¹

Las transformaciones económicas y sociales producidas bajo el autoritarismo provocaron un cambio en las orientaciones de la opinión pública hacia el rol del mercado en la sociedad, la función del Estado y papel de los empresarios. Este impacto se hizo notar también en un cambio de percepciones acerca del funcionamiento del tradicional sistema de partidos, del rol de la clase política, y de su adaptación a los

60 Para muchos políticos de oposición esto fue una sorpresa; para Sergio Bitar el NO representaba aproximadamente el 70% de las preferencias y para Gabriel Valdés el régimen nunca obtendría mas allá de un 20% de apoyo. Ver **Revista Cosas**, No 301 del 14 abril 1988, p. 16; No. 303 del 12 de mayo de 1988, p. 60.

61 Ver el ensayo de Guillermo Campero, «El riesgo de votar por Pinochet», en **Apsi** 264, del 8 al 14 de agosto de 1988, p. 31; «Los empresarios y el proceso de democratización», ILET, Documento de Trabajo, 1989 del mismo autor y Alejandro Foxley, «Bases para el desarrollo de la economía chilena: una visión alternativa», en ICARE, **La libre empresa y el futuro de Chile** (versión completa del 10º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '88) (Santiago, 1989), pp. 46-56.

cambios socio-económicos ocurridos. Un análisis de varias encuestas de opinión pública realizadas durante 1985, 1986 y 1987 concluyó:

Existe un predominio de opiniones favorables a la privatización, al productivismo y a la distribución individualista en la producción. Esto estaría dando cuenta de que los valores más identificados con la ideología liberal-productivista tienden a predominar en la población, aún cuando existe una presencia importante de valores identificados con la ideología estatista-igualitaria.⁶²

Sin embargo, dicho estudio también detectó la persistencia de la tradicional asociación entre ideología económica y posición política que vinculan las opciones estatistas-igualitarias con posiciones de izquierda y centro-izquierda y las liberales-productivistas con posiciones de centro y de centro-derecha. Esto reduciría de alguna manera los grados de libertad que tendrían los partidos para elaborar sus propuestas partidarias.⁶³

Dentro de este contexto se inicia el año de las elecciones presidenciales, con los partidos políticos tratando de recomponer y consolidar sus alianzas y simultáneamente respondiendo a los cambios experimentados por la sociedad en la elaboración de sus programas.

LOS EMPRESARIOS Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1989

Después de la derrota del plebiscito el empresariado deja en claro que la transición a la democracia se hará dentro de «los procedimientos previstos por la Constitución conducentes a una futura elección presidencial y parlamentaria» y acepta el liderazgo de los partidos políticos: «son los partidos políticos los que tienen la responsabilidad de enfrentar el nuevo desafío». Para algunos dirigentes, los empresarios tendrían que participar «dentro de los partidos que defienden las ideas y los principios que hacen posible que la empresa privada funcione y entregue su aporte al desarrollo del país». Nuevamente, tal como ocurrió antes del plebiscito, los empresarios rechazan todo intento de modificación de las etapas y del calendario establecido para adelantar las elecciones, como eran los propósitos de la oposición.⁶⁴

62 Baño, «Acerca del sistema de partidos probable», p. 34. Ver también Antonio Alaminos, «Percepción de los partidos políticos al comenzar la transición», Documento de Trabajo No. 422, FLACSO (Agosto de 1989).

63 Baño, pp. 48-49.

64 Declaración de la Confederación de la Producción y del Comercio, **El Mercurio**, 7 octubre 1988; declaraciones de Angel Fantuzzi, industrial y político de Renovación Nacional, **Ercilla**, 14 de diciembre de 1988, p. 12 ; y de Manuel Feliú, presidente de la CPC, **Ercilla**, 7 de diciembre de 1988, p. 12.

En esta etapa, ante elecciones libres y competitivas cobran especial relevancia la dinámica de alianzas y oposiciones al interior del sistema de partidos; los procesos destinados a seleccionar los candidatos a la presidencia y al congreso; y la elaboración de los programas de gobierno. Dado los resultados del plebiscito, la Concertación trata de consolidar la exitosa coalición de oposición al Presidente Pinochet, transformándola en una eficaz coalición electoral que repita el triunfo ya logrado. Su principal desafío será presentar un programa de gobierno que capitalizando las necesidades sociales de la población, sea atractivo electoralmente, y simultáneamente minimize la incertidumbre y desconfianza en relación al futuro económico que provocó el triunfo en los sectores empresariales. En las manos de estos últimos aparecen controladas las principales variables de la actividad económica que permitirán cumplir ese programa. Dadas las tendencias políticas en el mundo y la inserción de la economía chilena en el contexto internacional, el modelo económico, legado por el autoritarismo y defendido por el empresariado aparece como un «enclave autoritario» prácticamente irreversible. En esta etapa parece vital la creación de condiciones, que una vez producido un triunfo electoral, aseguren una coalición de gobierno estable y por sobre todo, la gobernabilidad del país.⁶⁵

Los empresarios y la Concertación de Partidos por la Democracia

Frente al plebiscito la tradición multipartidista y competitiva se vio subordinada a la necesidad de unidad para oponerse al régimen y a Pinochet. Ahora, frente a una elección abierta y competitiva los partidos de oposición deben efectivamente demostrar que la tendencia a formar coaliciones amplias y pluralistas se ha consolidado. El año 1989 es el año de prueba para la naciente Concertación. El diseño de mecanismos que permitan resolver el problema de la selección del candidato a la Presidencia de la República, candidatos al parlamento y la formulación de un programa de gobierno se transforman en cuestiones cruciales.

Un acercamiento definitivo de posiciones entre la Democracia

65 Ver John Sheanan, «Economic Policies and the Prospects for Successful Transition from Authoritarian Rule in Latin America,» en Guillermo O'Donnell, P. Schmitter and L. Whitehead, **Transitions from Authoritarian Rule**; Laurence Whitehead, «The Consolidation of Fragile Democracies: A Discussion with Illustrations,» in Robert E. Pastor, **Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum** (New York: Holmes and Meier, 1989); Manuel Antonio Garretón, «La posibilidad democrática en Chile: condiciones y desafíos,» en Ana M. Stuenkel (editora), **Democracia Contemporánea: transición y consolidación** (Santiago: Ediciones Universidad Católica, 1990).

Cristiana y el Partido Socialista–Nuñez se produce hacia mediados de 1989. El abandono del *camino propio* y la *renovación socialista* dan lugar a un amplio entendimiento entre sectores de centro y de izquierda. Patricio Aylwin, elegido presidente de la Democracia Cristiana –con la tesis de lograr una amplia base de apoyo para enfrentar el régimen– declara que «pasó la época de los intentos de realizar un modelo ideológico correspondiente a un sector de la población. Hay que buscar grandes consensos, grandes acuerdos, los más amplios posibles, para darle eficacia y estabilidad a la acción del gobierno». Ricardo Nuñez expresa en su Cuenta al XXV Congreso General del Partido Socialista de Chile, celebrado en junio de 1989, que forjar «una alianza perdurable entre las fuerzas del cambio, más allá de sus legítimas diferencias ideológicas, es...el gran desafío que condiciona nuestras opciones políticas». ⁶⁶ El voto político del congreso acuerda:

aspiramos a una democracia plena, pluralista y participativa. Nuestras ideas y propuestas responden, en suma, a un profundo y amplio proceso de renovación del socialismo en Chile» [para] «desechar el leninismo por considerarlo una construcción dogmática, autoritaria y reduccionista que no se corresponde con la evolución actual del socialismo en el mundo ni con los ideales democráticos del Partido». ⁶⁷

Con posterioridad, el pleno del Partido Socialista–Almeyda se compromete a desarrollar la unidad de la izquierda, para que se configure «como un actor político capaz de gravitar efectivamente sobre el curso y el carácter que adopte el proceso de recuperación democrática del país». ⁶⁸ Sin embargo, la unidad socialista no se producirá hasta después del triunfo de la Concertación en las elecciones de diciembre. En ella se imponen definitivamente los principios y perspectivas del socialismo renovado y se evita cualquier quiebre que pudiera afectar su funcionamiento como coalición de gobierno y entorpecer sus relaciones con el sector empresarial. ⁶⁹

66 **La Época**, 21 de mayo de 1989, p. 10; Ricardo Nuñez, «Cuenta del Secretario General, XXV Congreso General del Partido Socialista de Chile» (Costa Azul, 29 de junio, 1989); y «Voto político del XXV Congreso del Partido Socialista de Chile (sector Nuñez)» en Ricardo Nuñez (comp.), **Socialismo: 10 años de renovación**, pp. 258, 280, 292.

67 *Ibidem*.

68 **El Mercurio**, 22 octubre 1989.

69 Ver «Los socialistas y la reconstrucción democrática de Chile» y «Documento de acuerdo político-doctrinario del socialismo» base de la unificación socialista en Ricardo Nuñez, **Socialismo: 10 años de renovación**.

Con la proclamación de Aylwin como candidato único presidencial a mediados de julio de 1989 se sella la alianza opositora. El candidato ideal debía ser para la oposición un hombre moderado, que inspirara confianza a los distintos sectores sociales; que fuera visto positivamente por los sectores empresariales y al mismo tiempo fuera percibido como un hombre que va a defender con firmeza los derechos de los trabajadores. Estas características, delineadas por Edgardo Boeninger casi un año antes de su nominación, no significaría, necesariamente, que el candidato de la Concertación las cumpliera a plenitud.⁷⁰ En relación al mundo empresarial y al modelo de economía existirá siempre un distanciamiento e incompreensión por parte del futuro Presidente tanto por su experiencia como por su formación doctrinaria, como quedará demostrado en su primer año de gobierno.

La arremetida del régimen militar después de la derrota del plebiscito para aprobar leyes claves –Ley del Banco Central, Ley de Bancos y estudio de la Ley del Estado Empresario– y acelerar las privatizaciones por un lado, crearon un amplio sentimiento de rechazo en la Concertación y por el otro, infundieron tranquilidad en el ambiente empresarial. La primera ley entregó autonomía al Banco Central en el manejo de las variables monetarias, vital para mantener los equilibrios macroeconómicos; la segunda, transformó la cartera vendida de la banca privada, producto de la crisis de 1982, en deuda subordinada; y la tercera, aprobada después de las elecciones de diciembre, limitó indefinidamente las actividades productivas del Estado.

La Ley del Banco Central fue vista por los empresarios como una separación efectiva del manejo económico de la contingencia política y de los gobiernos de turno; la Ley de Bancos garantiza al sector privado que los bancos no serían controlados ni intervenidos por futuros gobiernos; y la Ley del Estado Empresario, aparte de disminuir el gasto fiscal para favorecer la inversión privada, limitaba definitivamente la influencia económica y política del Estado. Para la Concertación estas leyes carecían de legitimidad y constituían parte de lo que se denominó «leyes de amarre». La primera imposibilitaría al futuro gobierno llevar un manejo coherente de la política fiscal, de acuerdo al programa por el cual fue votado. Solamente el acuerdo político entre gobierno y oposición para nombrar los Directores del Banco Central cinco días antes de las elecciones minimizó las fricciones entre gobierno, empresarios y oposición provocadas por su nuevo status jurídico. La segunda, fue criticada como una falta de confianza en la gestión de un gobierno de oposición

70 *Cosas* 312, 15 septiembre 1988, p. 35.

y criticada por la injusticia social que se cometería al favorecer a poderosos grupos de inversionistas que controlaban la banca privada ya que estos pagarían de acuerdo a la rentabilidad futura de los negocios bancarios su deuda con el Estado. Y la tercera, limitaba la capacidad de acción del futuro gobierno para llevar a cabo su programa.⁷¹

Al acercamiento entre los empresarios y la Concertación por la Democracia en el período post-plebiscitario inmediato y pre-eleccionario contribuyeron las declaraciones tranquilizadoras de sus más importantes líderes; los acuerdos logrados dentro del socialismo; y fundamentalmente, la postura de los economistas de la Concertación que insistieron en aprovechar los aspectos positivos del modelo económico, cambiando sólo aquellos que consideraban negativos.⁷² Sin embargo, esto no significó que cuando se conociera el Programa de la Concertación no emergieran importantes cuestionamientos de sus componentes por parte del empresariado.

Los empresarios y el Programa de Gobierno de la Concertación

Tal era la importancia de llegar a un acuerdo programático en la Concertación, que se planteó como alternativa que si algunos partidos tenían discrepancias serias, simplemente no serían miembros de una futura coalición de gobierno, aunque si podrían participar en los llamados «pactos de gobernabilidad». La tarea de los empresarios sería según su máximo dirigente, «examinar con atención todas las propuestas de los diferentes partidos y agrupaciones políticas para dar a conocer públicamente nuestras opiniones.»⁷³ Para estos efectos la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio se reúne varias veces con las directivas de los diferentes partidos políticos y los técnicos integrantes de la Concertación.

El borrador del Programa de la Concertación Democrática que se presenta para la discusión en Marzo de 1989 contiene entre sus diferentes aspectos programáticos aquellos más conflictivos que habían estado ya

71 Ver **El Mercurio**, días 5, 7, 10 y 11 de julio de 1989; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, «Palabras del Presidente» en **Síntesis de Actividades 1989**; e ILADES/Georgetown University, «El problema de la deuda subordinada», **Trabajo de Asesoría Económica al Congreso Nacional** (TASC), Nº 29 de Diciembre de 1991.

72 Foxley, **Ercilla**, 19 de octubre de 1988, p. 16.

73 Alejandro Foxley, «Foro», y Manuel Feliú, «El compromiso con la Libertad y el Desarrollo», en ICARE, **La libre empresa y el futuro de Chile** (versión completa del 10º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '88) (Santiago, 1989), pp. 60-61 y p. 243, respectivamente.

presentes en el *Compromiso Económico y Social por el NO*. La oposición vuelve a insistir en modificaciones a la legislación laboral (fundamentalmente en lo concerniente al contrato de trabajo, derecho a huelga, afiliación sindical obligatoria, negociación colectiva por ramas de actividad y organización sindical); en el aumento de los impuestos a las empresas; en la creación de un Fondo de Solidaridad y en la reasignación del gasto público en Defensa; en la participación del Estado en la promoción activa del crecimiento y en la producción de bienes y servicios.⁷⁴ Los empresarios se muestran reacios a aceptar todas estos cambios, los critican como contradictorios con el modelo económico vigente y advierten sobre el efecto negativo que tendrán en el crecimiento económico.

Las «Bases Programáticas Económico-Sociales» del Programa de Gobierno que se lanza en julio de 1989 son el producto de intensas negociaciones al interior de la Concertación, las que se desarrollan simultáneamente junto con el proceso de definiciones de estrategias para enfrentar las elecciones presidenciales y consolidarse como coalición de gobierno. El programa es partidario de la empresa privada en sus «diversas formas» y considera al mercado como «insustituible para una eficiente asignación de los recursos» siempre que exista «un compromiso simultáneo con el crecimiento y la justicia social». Sin embargo, reitera la idea de un Estado activo que configura una «economía mixta en que sector público y sector privado se complementan adecuadamente.» Propone mecanismos de concertación social para encauzar los conflictos sociales, a condición de que se mantengan el pluralismo, la autonomía y la representatividad de los actores sociales. Reconoce a los trabajadores y a los empresarios y a sus respectivas organizaciones gremiales como actores titulares de las relaciones laborales, promoviendo su mayor protagonismo y participación en la toma de decisiones para lograr así la «consolidación y profundización de la democracia». Finalmente, ante una legislación laboral heredada del régimen militar y que considera carente de «legitimidad social», propone su modificación para así «regular de manera armónica las relaciones entre trabajadores y empresarios en un futuro régimen democrático.»⁷⁵

El realismo del Partido Socialista-Núñez permitió en gran medida que dicho programa fuera posible. Un mes antes del lanzamiento del Programa de la Concertación, en junio de 1989, los socialistas reconocen que «la dictadura ha transformado profundamente el rostro económico

74 *El Mercurio*, 9 marzo 1989.

75 Concertación de Partidos por la Democracia, **Programa de Gobierno** (julio de 1989), pp. 11-14; 25-29.

y social de nuestro país» y que «no es posible volver atrás y pretender que nada ha pasado». Por tanto, «toda transición, por acelerada que sea, no puede hacerse a costa del desequilibrio de las variables macroeconómicas fundamentales». Haciéndose eco de estas declaraciones de su Secretario General, el XXV Congreso del Partido Socialista acuerda, que frente a una política económico-social injusta –que socializa las pérdidas de una minoría, transfiriéndolas al conjunto de la sociedad– sólo se puede responder con una disciplina democrática «que concierte el esfuerzo del Estado, de los trabajadores y los empresarios». En similares términos el Partido por la Democracia (PPD), en su programa aprobado en julio, propone «superar las inequidades en un marco de estabilidad» y «llama a los empresarios a asumir una nueva actitud de diálogo y concertación social que contribuya a resolver los desequilibrios sociales más agudos.»

⁷⁶ Para los socialistas era necesario superar una «visión errada de la empresa, que privilegiaba los antagonismos por sobre los múltiples lazos de cooperación» y reconciliar definitivamente «la empresa con la democracia...ya que el empresario había sido débil en la defensa de los principios democráticos». ⁷⁷ Es decir, se concede a los empresarios por parte del socialismo renovado y base de la nueva izquierda chilena, un importante rol a jugar en el futuro democrático.

Al conocerse el Programa de Gobierno de la Concertación las críticas empresariales no se hicieron esperar. Los empresarios reconocen la importancia que se le otorga al sector privado, a la definición del mercado como buen asignador de recursos, a la afirmación de que no habrá fijación de precios y a la intención de mantener la economía abierta al exterior a través de aranceles bajos y parejos. Pero, según la SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio, el programa presentaba «ambigüedades y contradicciones» tales como pretender aumentar los impuestos y simultáneamente incrementar la inversión privada o mantener la negociación colectiva a nivel de empresa mientras paralelamente la introducía a nivel sectorial. Entre otras discrepancias, aluden también a la inconsistencia de postular al mismo tiempo la libertad sindical y la cotización obligatoria. El programa contendría elementos que según los líderes empresariales serían «rebotes de pensamiento intervencionista». ⁷⁸ Según las organizaciones que ejercen

76 Ricardo Nuñez, **Socialismo: 10 años de renovación**, Tomo I, pp. 257, 278 y 282; **La democracia que anhelamos: Programa del Partido por la Democracia (PPD)**, Santiago, septiembre de 1989, p. 178.

77 Declaraciones de Carlos Ominami en SONAMI, **Boletín Minero**, julio de 1989, pp. 32-33.

78 Ver declaraciones de Fernando Agüero durante la 105a Asamblea General de la SOFOFA y de Manuel Feliú en la CEPAL, **El Mercurio**, 26, 27 y 28 de julio de 1989.

el liderazgo empresarial, las inconsistencias del Programa de la Concertación serían un reflejo de la diversidad ideológica de la coalición opositora, que necesitaba opciones políticas aceptables para todos sus integrantes.⁷⁹

En respuesta a estas inquietudes la Confederación de la Producción y del Comercio, da a conocer a escasas semanas de las elecciones, un documento con la propuesta empresarial suscrito por las seis ramas que la integran. Se defienden en forma institucional la propiedad privada, el mercado, el principio de subsidiaridad del Estado, la libertad sindical y la estabilidad económica. Se oponen al alza de los tributos, a la inamovilidad laboral y a la negociación colectiva por áreas de actividad. Asimismo, los empresarios se declaran partidarios de una democracia pluralista y de la estabilidad en el tránsito de un gobierno a otro. Aparte de suscribir estos principios generales, la SNA y SONAMI específicamente, se oponen a la eliminación del régimen de renta presunta y la Asociación de Bancos apoya la autonomía del Banco Central.⁸⁰

La desconfianza con que inicialmente los empresarios reaccionan ante los proyectos de la oposición al régimen militar se va atenuando en la medida en que sus dirigentes y partidos aparecen como más moderados en relación a la aceptación de elementos claves del modelo económico. Para el Presidente de la Confederación «todos los políticos que pueden ser gobierno mañana, hablan hoy de que van a mantener los equilibrios macroeconómicos. Chile va a tener viabilidad política y económica». A pesar de las discrepancias puntuales y ambigüedades ya señaladas, este entendimiento asegurará la supervivencia del modelo económico en democracia y todo dependerá de «las personas, la cara de la gente que ejerza autoridad para realizar estos programas».⁸¹

Así es que en ENADE '89, a escasos días de las elecciones, las personas que ejercerían el poder esgrimieron sus mejores argumentos para tranquilizar a los empresarios. Edgardo Boeninger afirma que «las elecciones no volverán a darse en Chile en torno al dilema polar entre capitalismo o socialismo». Y Alejandro Foxley, quien ya se había reunido con los empresarios en ENADE '88 explica que el rol de un sector privado dinámico y otros rasgos del modelo económico habían sido «incorpora-

79 Ver Fernando Agüero, *El Mercurio*, 1º octubre 1989.

80 Confederación de la Producción y del Comercio, **Libertad de emprender: condición para el desarrollo** (Santiago, noviembre 1989). Para una defensa de la política industrial existente hasta la fecha, ver Jaime Alé, «La industria chilena bajo una política de libre mercado» (manuscrito), Gerencia de Estudios de SOFOFA, octubre de 1989.

81 Feliú, *Ercilla*, 15 noviembre 1989, p. 17-18.

dos totalmente en los programas económicos de las distintas candidaturas y estaban sin duda incorporados claramente en el programa económico de la Concertación». ⁸² Carlos Ominami fue sin lugar a dudas el más categórico en dicho evento empresarial al afirmar que:

la transición a la democracia en Chile pone fin no sólo a un régimen autoritario, sino también a varias décadas de experimentos políticos y sociales cuyo resultado fue la polarización de la sociedad y el predominio de enfoques rígidos en la gestión gubernamental. ⁸³

Patricio Aylwin, futuro Presidente de la República, expuso ante los empresarios que su gobierno aseguraría el cambio con estabilidad porque

el país necesita del cambio en lo político y social conjuntamente con la estabilidad y el progreso en lo económico....El partido en el cual yo milito toda mi vida, enfatizamos la necesidad de los cambios sin destacar en toda su importancia la necesidad de hacerlos en un clima de estabilidad....Movidos por ideales superiores, contribuimos a crear un clima de excesivo conflicto y confrontación....Hoy cambió el mundo y también hemos cambiado nosotros. ⁸⁴

El comportamiento político de los empresarios frente a las elecciones presidenciales

Entre el período previo a la celebración del plebiscito y las elecciones presidenciales el empresariado mostró en general un gran espíritu de cohesión, lo que contrasta con los intentos de la oposición política de centro-izquierda por forjar una alianza estable, y de la Derecha, el tradicional representante de los intereses empresariales, que se debate nuevamente en fricciones internas a raíz de la nominación del candidato presidencial. ⁸⁵

82 ICARE, **Quo Vadis, Chile** (versión completa del 11º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '89), 1990, pp. 46 y 70.

83 *Ibid.*, p. 90.

84 *Ibidem*, pp. 201-207. Un conjunto de exposiciones analizando el contexto político y económico que enfrentarán los principales hombres del futuro equipo de gobierno se encuentra en Oscar Muñoz (comp.), **Transición a la democracia: marco político y económico** (Santiago: CIEPLAN, 1990).

85 Para un análisis general de la dinámica de las elecciones ver Alan Angell and Benny Pollack, «The Chilean Elections of 1989 and the Politics of the Transition to Democracy» (manuscrito sin fecha).

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 1989 el empresariado evoluciona hacia un rol mucho más independiente de los partidos de Derecha y asume directamente, a través de sus organizaciones de cúpula, la defensa activa del modelo de economía de mercado legado por el régimen militar. A diferencia del plebiscito, donde el empresariado se juega por el «todo o nada» frente al régimen autoritario, apoyando la candidatura de Pinochet como única alternativa viable, para la elección presidencial este asume un rol neutral frente a los posibles resultados, ante la certeza de que el modelo económico no será alterado en lo fundamental.⁸⁶

Los empresarios se muestran abiertos a la posibilidad de que incluso se efectúen reformas a la Constitución de 1980 y se mantienen atentos a las negociaciones que conduce el gobierno militar con la oposición a través de Renovación Nacional. A este efecto señalan que se debe garantizar «el sistema de libertades y derechos personales en forma permanente, de modo que estas importantes materias queden fuera del ámbito de decisión de mayorías circunstanciales». Para ellos es vital que la transición hacia la democracia tenga un desenlace pacífico; que se eliminen «rebotes de pensamiento intervencionista...que le quitan espacio a las personas y generan desconfianza en el sector privado»; y que de una vez por todas se rechacen las «supuestas maravillas de una concertación social de cúpulas, dirigidas por el Estado, pues sospechamos de los esquemas corporativistas». Así por ejemplo, consideran una mala señal para la estabilidad de la transición que se cuestione la permanencia del Presidente Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, cuando la Constitución así lo permite. Y especialmente cuando las «Fuerzas Armadas están demostrando que quieren un tránsito normal hacia la democracia».⁸⁷

Los empresarios también se distancian definitivamente del régimen autoritario antes de las elecciones y como prueba de ello, la democracia empieza a aparecer en su discurso público como un sistema compatible

86 Ver declaraciones de Manuel Feliú a **Estrategia**, 20 al 26 de noviembre de 1989, p. 21 y **El Mercurio**, 10 diciembre 1989.

87 Ver declaraciones de la Confederación de la Producción y del Comercio, aparecidas en **El Mercurio**, el 22 de abril de 1989 y el 27 julio de 1989. Asimismo, la entrevista de Manuel Feliú, **La Epoca**, 2 de julio de 1989, p. 12. Para un análisis de la dinámica y contenido de las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno militar, Renovación Nacional y la Concertación durante 1989 con el fin de reformar la Constitución de 1980, ver Carlos Andrade G., **Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980** (Santiago: Editorial Jurídica, 1991), y Francisco Geisse y José A. Ramírez, **La Reforma Constitucional** (Santiago: CESOC, 1989).

con una economía de mercado ya consolidada: «en esa economía social de mercado nos hemos acostumbrado a la democracia, a tener que ser eficientes para que voten por nosotros y no por otros y nos saquen del mercado». Esta posición es acompañada de una creciente preocupación por el problema social, laboral y de participación democrática: «durante tanto años de gobierno militar autoritario, las decisiones se han tomado sin la consulta que implica vivir en una democracia, en que todo pasa por miles de cedazos antes de decidirse.» Y se apoya instituciones como el congreso porque durante el gobierno militar nunca «hubo un Parlamento donde hubiera la posibilidad de que los que se sentían descontentos con el cambio lo hicieran presente políticamente». ⁸⁸

La insistencia en el Parlamento después de largos años de autoritarismo, se debe al inminente control del Ejecutivo por la Concertación y al equilibrio de poderes que el empresariado busca a través de una mayoría de centro-derecha en la Cámara Alta del Congreso. En la Reforma Constitucional de 1989 se mantuvieron los senadores designados y no se alteró el sistema electoral binominal, por lo que era probable que los empresarios buscaran fortalecer su influencia a través del Senado, experiencia ya presente en los años sesenta.⁸⁹ Como había manifestado Fernando Aguero antes del plebiscito, los empresariados ya planeaban jugarse la representación de sus intereses en el Senado: «si gana el *no* en el plebiscito y luego asume un Presidente de oposición, éste no va tener mayoría en el parlamento...». Similar planteamiento fue emitido en ENADE '88: «si los partidos afines al régimen obtienen la mitad del Congreso, serían un factor de equilibrio, aunque el nuevo Presidente les sea adverso. Desde esa posición fuerte podrían defender lo esencial de la política económica o cualquier otro principio básico de la llamada sociedad libre».⁹⁰ Por lo tanto, los empresarios exigirán a quienes opten

88 Ver declaraciones de Manuel Feljú a **La Epoca**, 2 julio de 1989; **Ercilla**, 15 de noviembre de 1989, p. 18; y **El Mercurio**, 10 de diciembre de 1989.

89 Ver William E. Dugan y Alfredo Rehren, «Impacto del régimen político en la intermediación de intereses: instituciones públicas y grupos empresariales en Chile» **Política** 22/23 (junio 1990), pp. 117-136; Constantine Menges, «Public Policy and Organized Business in Chile», **Journal of International Affairs** 20 (1966): 343-365; Weston H. Agor, **The Chilean Senate: Internal Distribution of Influence** (Austin: University of Texas Press, 1971); Ben G. Burnett, **Political Groups in Chile: The Dialogue Between Order and Change** (Austin: University of Texas Press, 1970).

90 Ver **Apsi** 263, del 1 al 7 de agosto de 1988, p. 43; Arturo Fontaine A., «Desafíos de la evolución del sistema político» en ICARE, **La libre empresa y el futuro de Chile** (versión completa del 10º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '88) (Santiago, 1989), p. 223; y la exposición del Presidente de la SOFOFA en la «Cena Anual de la Industria» en Cámara de Comercio de Santiago, **El Informativo** Nº 8234 del 28 noviembre 1988.

a cargos de representación popular que valoren la libertad en lo económico para recibir su respaldo. Simultáneamente, Aylwin planteaba que para transformar la institucionalidad en democracia era necesario «conquistar no solo la Presidencia de la República sino también una mayoría holgada en el Congreso.»⁹¹ Pero a fines de 1989 resultaba claro, como lo manifestara José Antonio Viera-Gallo en ENADE '89 que «la derecha tendrá la llave en el Senado para hacer que esta transición tenga éxito o para bloquearla».⁹²

El empresariado, al identificarse con el modelo de economía de mercado y frente a una Derecha política dividida, se sitúa en una posición de influencia expectante ante las próximas elecciones presidenciales. Define a su candidato ideal como «una persona que no esté vinculada a un partido y que no haya participado directamente en el gobierno». Es así que no se inclinan por ninguna candidatura presidencial en particular, pero manifiestan que si la Derecha no tiene ningún candidato a la presidencia que la unifique, entonces «en ese caso sí tendremos que actuar» y «los empresarios uniremos a la Derecha».⁹³ La candidatura de Sergio Onofre Jarpa levantada por Renovación Nacional, si bien contó con la complacencia de las organizaciones empresariales, también generó reticencias entre ciertos grupos empresariales, ya que como Ministro del Interior del régimen militar cuestionó el modelo económico implementado por los *Chicago Boys* durante la crisis de 1983.

La candidatura de Hernán Büchi nace en el contexto de interpretaciones contradictorias tanto dentro del ámbito empresarial como del ámbito político de Derecha. Después de rechazar primero y aceptar definitivamente su nominación en julio de 1989, el programa de Büchi da confianza a los empresarios, pero no así su candidatura. Esta aparece como impuesta por el gobierno militar y su nombre aparece demasiado ligado al Presidente Pinochet y a ciertos grupos empresariales, lo que le resta credibilidad política. Incluso, ciertas propuestas específicas de su programa, como el aumento del empleo, resultaron contradictorias con su desempeño previo como Ministro de Hacienda, cuando impuso medidas de austeridad. Manuel Feliú declaró que la candidatura Büchi no prosperaría

91 **La Epoca**, 20 de noviembre de 1988, p. 12.

92 ICARE, **Quo Vadis, Chile** (versión completa del 11º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '89), 1990, p. 60.

93 Declaraciones de Fernando Agüero, Presidente de SOFOFA a **La Epoca**, 31 diciembre 1988, p. 23.

sólo por sus condiciones de economista y manejo de la macroeconomía. Aquí hay que obtener votos y ese solo tema no le basta, ya se probó que no bastaba. En el plebiscito fue negativa la percepción de la grandes masas con respecto a la conducción económica, en consecuencia, debe demostrar condiciones políticas, eso es lo importante hoy día.⁹⁴

Esta interpretación es contradictoria con la de Agüero quien, a pesar de haber considerado a Büchi un «mal candidato» ya a fines de 1988, porque no sacaría más del 43% de los votos que Pinochet obtuvo en el plebiscito, ahora, a dos meses de las elecciones, lo considera como el único candidato que asegura al empresariado la continuidad de la política económica. Similar posición adopta la SNA, que sin endorsar la candidatura Büchi, llama a los agricultores, a través de su presidente, a defender su supervivencia, apoyando aquellos hombres que en sus zonas defienden los postulados de la SNA: «defensa de la libertad, del derecho de propiedad y de la libre iniciativa».⁹⁵ De modo que mientras el Presidente de la Confederación de la Producción enfatiza las malas dotes del candidato y su estrategia electoral, el Presidente de la SOFOFA y de la SNA apuestan a asegurar la continuidad del manejo macroeconómico, con una alternativa ya derrotada en el plebiscito.

A pesar de que Büchi contó con el decidido apoyo de la Unión Democrática Independiente y el apoyo programático de Renovación Nacional, este último partido cuestionó su status de independiente y criticó sus opiniones acerca de la marginalidad de los partidos políticos en la sociedad chilena. En un documento oficial acerca de la campaña y la futura democracia que Renovación dió a conocer antes de endorsar su candidatura, le advirtió que «en democracia, la adhesión a las personas resulta siempre transitoria» y que «la convivencia democrática exige la consolidación de un verdadero sistema de partidos». Dichos principios fueron igualmente destacados en su Programa 1989, con el cual

94 Manuel Feliú a **El Mercurio**, 22 abril 1989, p. C10. Opiniones similares fueron vertidas por otros empresarios a comienzos de 1989. Ver **Estrategia**, 9 al 15 de enero de 1989, pp. 16-17; y 16 al 22 de enero, pp. 16-17. En Marzo de 1989 Büchi aparecía por sobre Aylwin en su «atractivo como persona», «vitalidad y entusiasmo» y similar en «honradez y confianza», tendencia que se revierte totalmente a contar de octubre del mismo año. Ver Roberto Méndez, «La opinión pública y la elección presidencial de 1989»; **Estudios Públicos** 38 (Otoño 1990), pp. 67-97.

95 Declaraciones de Fernando Agüero a **La Epoca**, 31 de diciembre de 1988, p. 23, y a **El Mercurio**, 1º de octubre de 1989, p. F16; las del Presidente de la SNA aparecen en **El Campesino**, Noviembre de 1989, p. 32.

Renovación Nacional se presentó al electorado. No caben dudas de que quien sería el principal partido de oposición, estaba dispuesto a jugar una oposición leal y a constituirse en el centro de las negociaciones que se realizaran en el futuro democrático: «si las corrientes políticas, sin perjuicio de afianzar sus legítimas identidades, se abren a la búsqueda de entendimientos recíprocamente aceptables, el sistema funciona y permite su paulatino perfeccionamiento».⁹⁶

Si bien en los lineamientos sustanciales de la política económica del Programa de Renovación Nacional y del Programa de Gobierno de Hernán Büchi existió consenso, hubo ciertos aspectos en la propuesta de este partido que pueden haber contribuido al distanciamiento de los empresarios y que contrastaron con las proposiciones de Büchi. Renovación Nacional declaró la inconveniencia de introducir modificaciones sustanciales en la tributación a la renta de las empresas, pero sugirió reponer el carácter de impuesto sobre base devengada, por un período de cuatro años, y restringir la aplicación del sistema de renta presunta sólo a los pequeños agricultores, mineros y transportistas. Se permitiría así al nuevo gobierno contar con fondos que le ayudaran a paliar las necesidades sociales del país. Por el contrario, el Programa Büchi se opuso a subir la carga tributaria y sostuvo que la solidaridad no puede «financiarse con impuestos que asfixien la economía, como postulan las concepciones de corte socialista».⁹⁷ Estos planteamientos ayudan a explicar también las diferencias de énfasis que hacen discrepar a sectores empresariales representados en las opiniones de SOFOFA y que apoyan al candidato Büchi, de aquellas de mayor contenido social, como las sostenidas por Manuel Feliú, que se oponen a su candidatura y acercan al dirigente de la Confederación a Renovación Nacional.

De modo que el pacto Democracia y Progreso nace con serias dificultades y su programa bastante atrasado en relación al de la Concertación. La perspectiva política y algunas proposiciones programáticas de Renovación Nacional, como ya hemos visto, la acercan más a la Concertación de Partidos por la Democracia que a sus aliados electorales, dejando abiertas las puertas a probables entendimientos con ella en el futuro parlamento.

96 Declaración de la Comisión Política de Renovación Nacional, **La Segunda**, 21 julio 1989, p. 16; Renovación Nacional, **Chile: una sociedad de oportunidades, una democracia de las libertades** (Programa 1989), p. 3.

97 Renovación Nacional, **Chile: una sociedad de oportunidades**, pp. 18-19; **Lineamientos Fundamentales del Programa de Gobierno de Hernán Büchi**, pp. 14 y 19.

En el transcurso del período pre-electoral, instituciones como la Cámara Nacional del Comercio y la Cámara Chilena de la Construcción adoptan posiciones un tanto más agresivas que las que tuvieron antes del plebiscito, si bien no asumen el activo trabajo de movilización de la opinión pública que emprenden la SNA y SOFOFA. El Presidente de la primera plantea en junio de 1989 la inquietud del gremio «al observar la ausencia de programas económicos precisos entre quienes postulan a ser Gobierno» y advierte a la opinión pública y a los líderes políticos en particular, que «Chile no debe considerarse un campo de experimentos políticos» y que «permaneceremos atentos a las eventuales desviaciones que intenten conducir al país por rumbos equivocados».⁹⁸

Al asumir como Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en Agosto de 1989, José A. Guzmán afirma que

el sector privado necesita percibir un clima favorable a la iniciativa privada y que en momentos cruciales el país tiene derecho de exigir de quienes pretenden gobernar la Nación claridad en sus principios, precisión en sus políticas, prudencia en sus declaraciones y respaldo técnico en sus planteamientos. Tenemos, a través de las organizaciones empresariales, la obligación de hacer presente a los dirigentes políticos las opiniones, ideas y sugerencias sobre la orientación socio-económica y sobre la orientación socio-política que permitan sostener un proceso de desarrollo armónico y equitativo para todos los chilenos.⁹⁹

El mensaje deja entrever que los empresarios aspiran a defender sus ideas e intereses en forma activa en el futuro democrático y a no jugar un papel secundario o subordinado a la clase política. Después de esta intervención, prácticamente a nombre de la clase empresarial, no cabe duda de las razones por las cuales el Presidente de la Cámara llega a ser electo aproximadamente un año después Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio para reemplazar a Manuel Feliú.

A medida que el proceso de transición avanza, los empresarios asumen con mayor fuerza su papel de integrantes de una clase dirigente, identificándose con ella, y compartiendo la responsabilidad en la conducción política del país con los líderes de los partidos que vuelven

98 Discurso del Presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Daniel Platovsky, el 6 de Junio de 1989, **El Informativo** N° 8.290 del 12 de junio de 1989, pp. 4-8.

99 Cámara Chilena de la Construcción, **Boletín Estadístico** N° 202 (Septiembre 1989), pp. 1.3- 1.18

a re-emergir en el nuevo contexto democrático: «En una economía social de mercado...la labor de los dirigentes empresariales es ver lo que le conviene no sólo al empresariado, sino que hay que equilibrarlo con lo que le conviene al país». ¹⁰⁰ Para cumplir este objetivo el cambio de modelo económico sentó las bases estructurales que permitirían transformar el carácter intermitente de la participación política de los empresarios en la democracia tradicional chilena —sólo cuando creían amenazados los principios que sustentaban sus intereses corporativos y/o socio-políticos— en una influencia de carácter sistémica. Ahora, en una sociedad en que existe una mayor independencia entre lo político y lo económico, un Estado disminuído y una menor influencia de las decisiones políticas en el desarrollo, el empresariado comparte con la clase política importantes funciones de liderazgo.

Cuanto trecho hay entre lo que se había planteado no hacía muchos años atrás, en ENADE '86, cuando se sostenía que el empresariado chileno carecía de cohesión de clase porque no había sabido trascender a su interés particular para defender el principio de la empresa privada y tampoco mostraba conciencia acerca de los problemas sociales que afectaban al país.¹⁰¹

El impacto de la derrota electoral

Ante la eventualidad de los resultados de la futura elección presidencial, ya en octubre de 1989, los empresarios mostraban su disposición a aceptar cambios importantes. Según Fernando Agüero «si suben los impuestos, se van a pagar...Si se modifica la ley laboral, se cumplirá con ella. No nos vamos a transformar en oposición». Es así, que una vez conocido el triunfo de la Concertación Manuel Feliú declaró: «nuestra actitud evidentemente será cooperar para que este gobierno tenga éxito, porque el éxito del gobierno es el éxito del país y es el éxito de nosotros». ¹⁰²

100 Feliú, *El Mercurio*, 27 abril 1989; *La Epoca*, 2 de julio de 1989

101 G. Vial, «Algunos rasgos característicos del empresariado chileno», en ICARE, *El empresario, motor del desarrollo* (versión completa del 8º Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE '86) (Santiago, 1987), citado por Cecilia Montero, «La evolución del empresariado chileno: ¿surge un nuevo actor?» *Colección de Estudios Cieplán* 30 (Diciembre de 1990), pp. 91-122. Ernest Bartell, c.s.c., en su estudio «Business Perceptions and the Transition to Democracy in Chile» (manuscrito sin fecha) también basado en entrevistas y realizado durante 1987-88, ya daba cuenta del profundo cambio en las orientaciones individuales de los empresarios, que respaldan totalmente las expresiones de sus dirigentes, así como los resultados de encuestas que hemos mencionado anteriormente.

102 *El Mercurio*, 10. octubre 1989 y 17 diciembre 1989.

El resultado de la elección presidencial no sorprendió al empresariado, el cual se mostró especialmente satisfecho por el resultado obtenido en las elecciones parlamentarias.¹⁰³ El equilibrio de fuerzas logrado en el Senado, que en conjunto con los senadores designados da a la oposición una mayoría relativa en la Cámara Alta, infundió tranquilidad en el empresariado. Cualquier reforma de envergadura al marco económico heredado tendría necesariamente que contar con el apoyo de la oposición. Desde un comienzo tres prominentes líderes empresariales electos al Congreso señalaron que «los más importante será defender el modelo en el que la empresa privada ha tenido un rol fundamental».¹⁰⁴ De ahora en adelante serán las relaciones que el sector empresarial logre estructurar con la derecha política en el congreso el factor clave de la defensa de sus intereses. Asimismo, por el lado sindical, líderes de amplia trayectoria también fueron electos al parlamento, lo que deja el debate de las relaciones empresario-sindicales, no sólo en manos de los técnicos, sino también bajo la influencia de experimentados empresarios y ex-sindicalistas.

En el período pre y post-electoral inmediato tanto sectores de Derecha como de la Concertación acordaron que el empresariado en conjunto con el movimiento laboral lograran en forma autónoma e independiente, un acuerdo económico-social que asegurara la gobernabilidad del país. Esta nueva orientación constituye una renovación de la política partidista chilena y es un claro indicador de que emergen nuevas formas de intermediación de intereses que vincularán en el futuro al sector laboral y empresarial con el Estado. Como decíamos en la introducción, el Chile pre-autoritario se caracterizó por su «corporativismo social» en que el Estado y partidos, altamente ideologizados y competitivos, dominaban las relaciones que pudieran desarrollar entre sí los distintos actores sociales. Ahora, en el proceso de redemocratización el país se desplaza hacia un pluralismo limitado, con el predominio de alianzas y pactos en el sistema de partidos y una

103 Para un análisis detallado de las elecciones presidenciales de 1989 ver Arturo Fontaine T., Harald Beyer y Luis H. Paul, «Mapa de las corrientes políticas en las elecciones generales de 1989» y Enrique Barros, «El nuevo orden de partidos: algunas hipótesis» en **Estudios Públicos** 38 (Otoño 1990), pp. 99-127 y 129-139 respectivamente.

104 Entre los empresarios se encuentran Sergio Romero (Ex-Vice-Presidente de la SNA), Angel Fantuzzi (ex-Presidente de ASIMET y fundador de Renovación Nacional) y Julio Lagos (ex-Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile), ver sus declaraciones en **Revista Industria** (febrero-marzo 1990), pp. 6-8. Entre los líderes sindicales se encuentran Rodolfo Seguel, Ricardo Navarrete, José Ruiz di Georgio y Ricardo Hormazábal.

formulación de políticas públicas concertada y no impuesta desde arriba por el Estado. Se disminuyó así la incertidumbre típica de los procesos de transición.¹⁰⁵

Un día antes de las elecciones, la Confederación y las seis ramas que la componen acordaron por unanimidad iniciar un diálogo con la Central Unica de Trabajadores (CUT). El 21 de diciembre se reúnen la CUT y la Confederación para iniciar la redacción de un documento que se firmará a fines de enero y que se conocerá con el nombre de *Marco de Referencia para el Diálogo* y que dará lugar en abril de 1990 al *Acuerdo Marco Tripartito*. El primer documento acordó imprimirle a las relaciones de trabajo un carácter no-confrontacional y no-reivindicacionista, creando un ambiente de estabilidad y confianza; y reconoció, además, el rol de la empresa privada en el mundo y la sociedad chilena. Surgen las primeras señales de que la clase empresarial se transformará definitivamente en un interlocutor legítimo en el nuevo período democrático.

Hasta que asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo de 1990, los ojos de los empresarios se ponen en la conformación de los equipos técnicos del futuro gobierno, en la estructuración del nuevo congreso, en el seguimiento de la agenda legislativa presidencial, y por sobre todo, en el establecimiento de relaciones armónicas con el sector laboral.

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y EL GOBIERNO DE LA CONCERTACION

Los empresarios esperaban con secreto optimismo que no se atentara contra los logros económicos alcanzados durante el régimen anterior. Sin embargo, ante la nueva realidad por la que atravesaba el país, y a pesar de que entre los líderes del gobierno de centro-izquierda figuraban muchos de los que habían ayudado a precipitar la crisis de septiembre de 1973, el empresariado, conciente de la alta votación obtenida por Aylwin, optó por acomodarse con el objeto de preservar el modelo económico impuesto por el Gobierno Militar.

Desde el momento mismo en que asume Aylwin, la Confederación de la Producción y del Comercio comprendió que su rol frente a las nuevas autoridades no era otro que el de defender el sistema económico de libre mercado. En otras palabras, los empresarios estaban ciertos de que su

105 Ver Alejandro Foxley, «Opciones para la política posautoritaria», en Alejandro Foxley, Michael S. MacPherson y Guillermo O'Donnell (comp.), **Democracia, desarrollo y el arte de traspasar fronteras: ensayos en honor de Albert O. Hirschman** (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1989).

papel dentro de la sociedad no sólo se limitaba a generar divisas y nuevos empleos. Por el contrario, concientes del éxito económico alcanzado, lo cual los situaba en una posición de privilegio, deciden encarar la nueva situación presentada, de tal modo que a partir de ahora, ya no estarán dispuestos a esperar una legislación impuesta desde arriba y a la cual posteriormente deberán adaptarse. Desde 11 de marzo de 1990, optan por salir al encuentro de cualquier iniciativa legal que atente contra los principios de una economía libre.

Los empresarios, el Presidente y su equipo de gobierno

Dado que la transición chilena se desarrolla dentro de un régimen presidencialista, el acceso del empresariado a la toma de decisiones de gobierno, al igual que en el pasado pre-autoritario, toma lugar a través del Ejecutivo. En este sentido el Presidente de la República y sus asesores económicos figuran como los puntos de acceso claves al gobierno, teniendo el Congreso, para muchos empresarios, un rol secundario en la formulación de las políticas públicas.

Desde la campaña presidencial los partidos integrantes de la Concertación entregaron al futuro Presidente amplia flexibilidad para conformar los cuadros políticos y técnicos con los cuales gobernaría. El prestigio de Aylwin al interior de la Concertación fue un importante factor de integración de una coalición de gobierno ideológicamente heterogénea, que no infundía, al asumir el poder, mucha confianza en el sector empresarial. Sin embargo, la intensa oposición al régimen autoritario permitió la formación de equipos interpartidarios y comisiones de trabajo que estuvieron en condiciones de asumir el gobierno y de implementar, desde la presidencia, un Programa de Gobierno sin mayores contratiempos. Los múltiples contactos establecidos durante la transición entre los equipos técnicos de la Concertación y los empresarios abrieron los canales de comunicación y vínculos necesarios para el acceso de estos últimos al Poder Ejecutivo.

El estilo moderado con que el Presidente Aylwin ejerció su liderazgo, una organización y estilo de toma de decisiones participativo, abierto y consultivo al interior de la presidencia aseguraron al equipo económico amplias atribuciones y poca interferencia en la aplicación del programa de gobierno. Los empresarios fortalecieron sus contactos y acceso al Ejecutivo, especialmente a nivel de la presidencia, sabiendo que allí residía en primera instancia la iniciativa legislativa. En los Ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo se localizó el equipo técnico del Presidente y en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se planificaba la estrategia para implementar la agenda

legislativa y la coordinación política general del programa de la Concertación.¹⁰⁶

Para los empresarios no fue difícil acostumbrarse a este esquema y puntos de acceso con los cuales siempre estuvieron familiarizados. Durante el régimen militar, muchos de estos accesos estuvieron cerrados, a pesar de la identidad de principios programáticos existentes entre el empresariado y el gobierno militar. La naturaleza tecnocrática del régimen muchas veces implicó una falta de apertura y de consultas con el sector privado, que a pesar de estar representado en ciertos ministerios, nunca manejó las posiciones claves desde donde se controlaba la política económica. Como reconocería Eugenio Heiremans «quizás el gobierno en el que los empresarios tuvieron menos influencias fue en el gobierno militar».¹⁰⁷

La conducción de las relaciones con el empresariado por parte del Presidente Aylwin fue desde el comienzo confusa. A pesar de su solidez y probidad moral, la emisión de señales conflictivas en muchas de sus intervenciones personales provocó severas críticas por parte del sector empresarial. A juicio de los empresarios, el Presidente tomó las críticas como una oposición política a su gobierno, situación que sólo podía comprenderse por la formación del Primer Mandatario en otro esquema económico, su apego a valores tradicionales y su dificultad para adaptarse a los cambios económicos operados bajo el autoritarismo. La actitud ambivalente del Presidente hacia el mercado y las privatizaciones, grafica perfectamente la situación:

Hoy por hoy, dentro de lo que ocurre en el mundo, el sistema de mercado es lo más adecuado, manteniéndose los resguardos necesarios para que el Estado haga primar el bien común sobre los intereses particulares, cuando éstos entren en conflicto....[pero] no soy un devoto de las privatizaciones....porque es desprenderse del capital que da rendimiento y después de un tiempo nos quedaríamos sin ingreso.¹⁰⁸

Tal situación quedó de manifiesto al terminar el primer año de gobierno, cuando el Presidente, en ENADE'90 llamó a la cooperación del

106 Para un análisis de la organización de la presidencia bajo Aylwin ver mi artículo «La Presidencia en el Gobierno de la Concertación», **Estudios Sociales** 75 (trimestre 1, 1993), pp. 15-38.

107 **Revista Industria** nº 1 (febrero-marzo 1990), p. 16.

108 Declaraciones del Presidente Aylwin a **El Mercurio**, 7 junio 1992.

sector público y el sector privado, y a «desterrar la desconfianza...de una buena parte del empresariado...que me parece injusta y negativa».¹⁰⁹

El equipo técnico de gobierno, sin embargo, desarrolló una perspectiva muy cercana a la del empresariado, lo que ciertamente contribuyó a introducir un factor de confianza en las relaciones con el ejecutivo. Según el Presidente de SOFOFA «el equipo económico del Gobierno, Foxley, Ominami, también Sergio Molina y Edgardo Boeninger, llevaron a cabo una política económicamente sana, moderna.»¹¹⁰

Concordante con lo anterior, la estrategia del sector empresarial para manejarse frente a los proyectos de la Concertación fue acceder primero al equipo técnico del Ejecutivo y en una segunda instancia al Congreso, especialmente a través del Senado y sus comisiones especializadas. Para esos efectos, SOFOFA, por ejemplo, mantuvo personal permanente en el congreso a cargo del seguimiento de las iniciativas del gobierno que afectarían a ese sector y al empresariado en general.

El staff de algunas comisiones del Senado, como la de Hacienda por ejemplo, estuvo integrada por funcionarios que pertenecieron a la Secretaría General de la Presidencia y técnicos que mantenían fuertes vínculos con el Ministerio de Hacienda. Esto permitió a este ministerio ejercer un fuerte control e influencia en los principales debates y decisiones que allí se tomaron. Además, al interior de la presidencia, también Hacienda ejerció un fuerte control de los decretos presidenciales relacionados con otros ministerios que afectarían el funcionamiento de la economía. Los datos obtenidos permiten concluir que el manejo y control de la política económica estuvo bastante descentralizado en el equipo técnico del gobierno, compensando las conflictivas señales que el Presidente Aylwin envió hacia los empresarios.

Los empresarios y la agenda legislativa de la Concertación

Entre las máximas prioridades del gobierno de la Concertación figuraron un aumento del gasto social y la democratización del movimiento sindical. Ambas medidas involucraban la introducción de drásticos ajustes al modelo heredado del régimen militar, y se esperaba que fueran rechazadas en el Senado. Los empresarios emplazaron al gobierno desde un comienzo para que respetara el rol subsidiario del Estado. Y es

109 Discurso de clausura del Excmo. Señor Presidente de la República, Don Patricio Aylwin A., en el XII Encuentro Nacional de Empresa, ENADE'90, en ICARE, **Mutatis Mutandi** (Santiago, 1991).

110 **Cosas**, N° 383, 28 de mayo de 1991, p. 112.

así que al comenzar el primer año del nuevo gobierno democrático los empresarios nacionales plantearon nuevamente su temor frente a las iniciativas gubernamentales. Los principales interrogantes se encontraban relacionados con la discusión de aquellas materias ya señaladas como conflictivas en la campaña presidencial: la reforma tributaria, la reforma laboral y el congelamiento de las privatizaciones.

La reforma tributaria

La Concertación había señalado en su programa la necesidad de un alza en los impuestos que permitiera la realización de los programas sociales de la administración entrante. Para obtener mayores ingresos, una vez en el gobierno, el Ejecutivo estableció contactos directos con los partidos de oposición tendientes a lograr una eventual alza de los impuestos, ya que la Concertación era contraria a generar recursos mediante nuevas privatizaciones. Por instrucciones del Presidente Aylwin, se llegó a un acuerdo entre el Ministro de Hacienda y la directiva de Renovación Nacional, antes de que el paquete de medidas pudiera ser analizado y aprobado por la coalición de gobierno. De inmediato se alzaron voces de discrepancia al interior de ésta en torno a la esencia del acuerdo y al hecho de que el Congreso hubiera sido marginado de las negociaciones.

Conocedores del planteamiento y posición de la Confederación de la Producción y del Comercio, los políticos de gobierno intentaron despejar sus dudas y acallar sus temores. De este modo, Eduardo Cerda, Diputado Demócrata Cristiano, señalaba en abril de 1990, que el gobierno no estaba dispuesto a gastar ni un peso sin que primero ese dinero no entrara en las arcas fiscales, para evitar que se generaran presiones populistas. Eduardo Frei argumentaba por su parte que los «impuestos que se anuncian son prudentes porque se ha tomado en cuenta el objetivo de mantener la inversión y el equilibrio macroeconómico».¹¹¹

La Derecha, dividida en los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, mostró posiciones divergentes. Los primeros por intermedio del senador Sebastián Piñera sostuvieron que su partido había apoyado el alza de los impuestos ya que la Concertación no estaba dispuesta a continuar con las privatizaciones de las empresas y, «concientes de que los pobres no podían esperar, decidieron apoyar al

111 **El Mercurio**, 22 de abril de 1990.

gobierno». Por otro lado, la UDI señalaba su preocupación porque estos dineros se destinarían a obras de infraestructura que podían ser abordados por los particulares, agregando además, que el alza en los impuestos disminuiría la inversión.¹¹²

Cabe destacar que esta iniciativa legal no sólo encontró una fuerte oposición entre los empresarios y un cierto sector de la Derecha. Los grupos más izquierdistas de la Concertación también la criticaron ásperamente, pues consideraron que esta reforma no era lo más indicado para incrementar el poder adquisitivo de los sectores más desposeídos.

Aylwin justificó la decisión de no consultar a su bancada parlamentaria argumentando que era necesario actuar con rapidez, dando a entender con ello que la intromisión del Poder Legislativo habría retardado la firma de un compromiso esencial con los pobres. El Mandatario prometió que el Congreso nunca más sería excluido de ulteriores debates políticos. El proyecto de ley en que se elevaba los tributos a las empresas y el impuesto al valor agregado se aprobó sin grandes objeciones, excepto las de la Unión Demócrata Independiente. Pero aun cuando el Jefe de Estado pudo justificar su actitud ante la coalición de gobierno, desde un comienzo quedó de manifiesto que el Parlamento deseaba reafirmar su papel, y que contaba incluso con el respaldo de los congresistas de Renovación Nacional, que también se sintieron postergados.

En definitiva, la medida de elevar el impuesto a las empresas al 15% no fue del agrado de los empresarios, a pesar de que como contrapartida se les ofreció un mecanismo de bonificación equivalente a un descuento del 2% del impuesto de primera categoría para todas las inversiones productivas que realizaran las empresas. Sin embargo, el aumento del I.V.A. del 16 al 18% y la mantención de la tributación por renta presunta en la minería, agricultura y los transportes fueron bienvenidas.¹¹³

La reforma tributaria significó para los empresarios un retroceso respecto a un sistema que tanto les había costado mantener y ponía en riesgo la estrategia de crecimiento. Por otra parte, no compartían el hecho de que el principal partido de la derecha opositora –Renovación Nacional– estuviera de acuerdo en apoyar estas reformas y hubiera estado en contacto con el gobierno sin establecer consultas previas con las organizaciones empresariales.

La Confederación de la Producción y del Comercio ante una situación de hechos consumados se declaró consciente de las necesida-

112 Ibidem.

113 APSI, abril 1990, pp. 25-28

des de los sectores más desposeídos y no tuvo más alternativa que concordar con la iniciativa del gobierno de ir en su ayuda. Sin embargo, pensaba que para que la reforma mostrara una cierta viabilidad era indispensable que las políticas de gobierno cumplieran a lo menos dos requisitos indispensables: «que fueran eficientes en cuanto a la recaudación de recursos que persiguen y que no perjudicaran el normal desarrollo de las actividades productivas». ¹¹⁴ Si éstos no llegaban a cumplirse, la inversión, el ahorro y la confianza se verían afectados impidiendo el normal desarrollo económico del país, lo que incidiría directamente en el progreso social.

La reforma laboral

Tal como lo consideraba el Programa de la Concertación, el gobierno planteó como prioritario modificar el Plan Laboral, ya que no podía esperarse de la legislación existente «la legitimidad social que era necesaria para regular de manera armónica las relaciones entre trabajadores y empresarios». Sin pretender restaurar el viejo sistema y volver atrás, el gobierno buscó «una institucionalidad laboral que fuera percibida como equitativa por las partes y permitiera una real participación de los distintos sectores». ¹¹⁵

Entre los diversos componentes considerados en la reforma laboral –modificación del contrato de trabajo, formación de centrales sindicales, establecimiento de la negociación colectiva más allá de la empresa– fue sin lugar a dudas este último el que más inquietó a los empresarios ya que las negociaciones por ramas de actividad tendría nefastas consecuencias para los consumidores y las empresas pequeñas. ¹¹⁶ Para los empresarios, todos los componentes de la reforma laboral generaban una rigidez que atentaba contra la necesaria movilidad laboral que debían tener las empresas en una economía competitiva. Además, era inaceptable que la CUT pretendiera tener la exclusividad en materia de negociación colectiva, sobre todo si ésto traía consigo la posibilidad de una huelga sin límite de tiempo, lo que atentaba contra la propiedad privada. ¹¹⁷ La reforma laboral ponía en juego, en definitiva, los mecanis-

114 **El Campesino**, abril 1990, pp. 2-3.

115 Entrevista a René Cortazar, **El Mercurio**, 24 diciembre 1989.

116 Ver declaración de José A. Guzman en Cámara Chilena de la Construcción, **Boletín Estadístico**, (septiembre, 1990), p. 35.

117 **La Nación**, julio 1990, p.16 y declaraciones de Jorge Prado, **El Campesino**, noviembre 1990, p. 22.

mos que aseguraban la existencia de una sociedad pluralista y competitiva.

Tanto empresarios como trabajadores concordaron que el país necesitaba una modificación a la legislación y que ésta sólo se lograría por medio de un acercamiento entre las partes. Sin embargo, a juicio de los primeros, la nueva legislación debía ser «capaz de perfeccionar la normativa vigente y capaz también de facilitar y adelantar el encuentro de la economía chilena con un ritmo y un nivel irreversible de desarrollo». ¹¹⁸ En otras palabras, el país debía seguir creciendo por medio de una economía de libre mercado que permitiera aumentar las remuneraciones de los trabajadores. En el lado opuesto, la Central Unica de Trabajadores, refutaba estas apreciaciones, señalando que nada se sacaba con crecer si un tercio de la población se encontraba en la marginalidad. ¹¹⁹

A diferencia de la reforma tributaria, el Congreso actuó en forma paralela a las negociaciones que se iniciaron y se condujeron inicialmente entre las organizaciones laborales y empresariales bajo la mediación del Ejecutivo. Pero sólo una vez que estas desembocaron en un punto muerto, y ante el llamado de la CUT a una movilización general, el Ejecutivo envió el proyecto de ley definitivo al Senado. Conteniendo una posición intermedia a aquellas sostenidas por empresarios y trabajadores, era la Cámara Alta donde el Ejecutivo había puesto sus expectativas de que se llegara a un consenso. Ante la sorpresa de los líderes sindicales, el Ejecutivo redujo a un segundo trámite el rol de la Cámara de Diputados. Había allí más probabilidades de que prosperaran las objeciones de la CUT, entrándose nuevamente las difíciles y estancadas negociaciones que conducían empresarios y sindicatos desde comienzos de año, pero esta vez el fracaso sería a nivel político.

Cuando las negociaciones se vieron detenidas en el Parlamento, el Presidente de la CUT, Manuel Bustos, llegó a sostener que de no llegarse a un acuerdo con respecto a ella, los trabajadores se verían en la necesidad de sobrepasar la actual legislación laboral. El dirigente estimaba que el gobierno había hecho todo lo posible por sacar adelante la nueva legislación, pero que ésta había sido entabada por los partidos de Derecha en el Senado. ¹²⁰

Ante esta declaración, la réplica del sector empresarial no se dejó esperar. La Confederación de la Producción y del Comercio en forma

118 Manuel Feliú, **Las Últimas Noticias**, julio 1990, p. 11.

119 Declaraciones de Manuel Bustos, **La Tercera**, agosto 1990, p. 16.

120 **La Nación**, 4 agosto 1990.

perentoria y enérgica expuso que el acercamiento logrado entre trabajadores y empresarios en el «Acuerdo Marco Tripartito» del 27 de abril de 1990, nunca tuvo por objetivo el nacimiento de una legislación laboral de común acuerdo, recalcando que lo que se quería lograr era dejar de lado la confrontación para dar paso al respeto mutuo. De hecho, dicho acuerdo, había sentado las bases del reconocimiento mutuo entre los sindicatos y el gremio empresarial; logró el reconocimiento de la empresa privada y el mercado como asignador de recursos y distribución de la riqueza generada; e introdujo la noción de crecimiento económico con equidad, todos principios dentro de los cuales debía negociarse la reforma laboral.¹²¹

Los empresarios culparon al ideologismo existente en las cúpulas sindicales de ser el elemento que impedía el avance en las conversaciones y por lo tanto, no estuvieron dispuestos a aceptar que por presiones de orden político los trabajadores sobrepasaran la legalidad vigente, ya que en ese caso, ellos darían por terminadas las negociaciones. Manuel Feliú sostuvo por su parte que «los empresarios estaban exentos de críticas en lo económico y que la Reforma Laboral haría de Chile un país mediocre, impidiendo su normal desarrollo. Si esta reforma no nos satisface, entonces no invertiremos en el país».¹²²

El gobierno, frente a la dureza de estas aseveraciones, se vio en la obligación de inducir a los trabajadores para que actuaran disciplinadamente. Fruto de este nuevo ordenamiento, tanto empresarios como trabajadores deciden reanudar las conversaciones detenidas en abril de 1990, luego que comisiones técnicas integradas por representantes de la CUT y la Confederación, formadas para buscar solución a los problemas entre ambos, declararan que había sido imposible llegar a un acuerdo.¹²³

Finalmente, entre los cambios aprobados por la Cámara Alta se incluyeron nuevas normas sobre el derecho de huelga, la creación de federaciones y confederaciones sindicales, y por último, la ampliación de la negociación colectiva a más de una sola empresa. Los resultados de la reforma laboral mantuvieron, sin embargo, el despido por «necesidades de la empresa», esta vez apelable ante los tribunales, y la ampliación de la negociación colectiva a nivel de ramas de actividad siempre que

121 Ver: Malva Espinosa, «Gobernabilidad y actores sociales. Los empresarios en la transición democrática», ponencia presentada en el 2º Congreso de Ciencia Política, Iquique, 24-27 de noviembre de 1992, pp. 11-15.

122 Manuel Feliú, **Ercilla**, agosto 1990, pp. 36-37.

123 **Estrategia**, semana del 23 al 29 de abril de 1990, p. 22.

existiera el consentimiento mutuo de todas las partes. El proyecto definitivo medió entre las posiciones sostenidas por las partes y si bien reconoció un mayor ámbito de legitimidad al movimiento sindical, también aseguró al empresariado su hegemonía en las relaciones de poder al interior de la empresa. Pero por sobre todo, la tramitación del proyecto realzó el carácter de actor social democrático de los empresarios, algo que perseguían desde la derrota del plebiscito.¹²⁴ En este proceso, la visión del Ejecutivo estuvo en mediar el conflicto de tal manera que el resultado final proviniera de un amplio acuerdo entre los sectores sociales involucrados y los principales partidos políticos de gobierno y oposición representados en el Congreso.

Las privatizaciones

Otro de los aspectos que más preocupó al mundo empresarial fue el relativo a las privatizaciones. Para los empresarios, era indispensable que el gobierno siguiera adelante con este proceso, argumentando que no se debía tener temor frente a los grupos económicos que se habían formado, ya que en ningún caso, esto atentaría contra la estabilidad política del país. La Confederación de la Producción y del Comercio sostenía que era necesario que el gobierno se desvinculara de aquellas empresas que aún estaban en manos del Estado, permitiendo de esta forma la creación de nuevas fuentes de trabajo que vendrían a absorber la mano de obra cesante y llevando así una tranquilidad a los sectores marginales.

En oposición al alza de los impuestos o cualquier otra medida que atentara en contra del rol subsidiario del Estado, los empresarios proponían continuar con las privatizaciones de aquellas empresas que aún estaban en manos del Estado, ya que para ellos «la mantención de activos económicos prescindibles en poder del Estado y la expansión de sus empresas en áreas que puede abordar el sector privado, a pretexto que constituyen patrimonio de todos los chilenos....limita la solución de los grandes problemas sociales, que sí interesan a todos los chilenos».¹²⁵

En mayo de 1990 la Cámara Chilena de la Construcción emplazaba al Ministro de Obras Públicas diciendo que «reiteramos nuestra anterior proposición de entregar por licitación a contratistas privados, la mantención de determinadas obras públicas».¹²⁶ Estas solicitudes a la autoridad

124 Malva Espinosa, «Gobernabilidad y actores sociales. Los empresarios...», p. 23.

125 José A. Guzmán, **Industria** (febrero-marzo 1991), p. 24.

126 José A. Guzmán, **Boletín Estadístico**, mayo 1990, p. 17.

perseguían dejar establecido el hecho que su sector estaba en condiciones de afrontar cualquier esfuerzo que se le demandara, siempre y cuando el Estado se comprometiera a respetar el principio de subsidiariedad.

Cuando la Corporación de Fomento de la Producción, expresó a los empresarios que como alternativa se les ofrecía participar en algunas empresas estatales que no marchaban del todo bien, recibió una rotunda negativa. La Confederación de la Producción y del Comercio no deseaba la creación de empresas mixtas, pues entendía que las metas de esta asociación dependerían exclusivamente de los gobiernos de turno. Los empresarios, fieles a su compromiso con la ideología neoliberal, insisten en que el Estado no debe inmiscuirse en sus asuntos, señalando que «nos tendremos que oponer a la creación de empresas mixtas, en que convivan capitales estatales y privados, en caso que se acuerde su creación en alguna ley».¹²⁷

Al contrario de lo ocurrido con la reforma tributaria, en el caso del congelamiento de las privatizaciones y alternativas mixtas propuestas por el gobierno, hay una total correspondencia entre la posición empresarial y la sostenida por Renovación Nacional, que acusa a la Concertación de negarse a reducir el tamaño del Estado. Una declaración del Secretario General de Gobierno en junio de 1991 oficializaba la posición del gobierno en torno a que en Chile el proceso de privatización había concluido y que no resultaba relevante continuar «un proceso de liquidación del patrimonio público». Renovación Nacional acusó al gobierno de una «creciente influencia socialista» y de resucitar el obsoleto concepto de Estado Empresario: «los activos prescindibles deben prescindirse y no crear empresas mixtas para su administración como propone el Consejo de Gabinete».¹²⁸

El tema parece haber generado discrepancias incluso al interior de la coalición de gobierno entre sectores demócratacristianos, socialistas y la CUT. El Ministro Foxley coincidió con el planteamiento de Renovación Nacional y en la inauguración de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en julio de 1991, su presidente, Andrés Zaldivar, señaló que «la Democracia Cristiana cree que pueden privatizarse todas aquellas empresas productivas hoy en manos del Estado, que no son esenciales para la prestación de un servicio de utilidad pública o que no sean estratégicas.» Ya anteriormente el Senador Eduardo Frei había manifestado la necesidad de continuar con el proceso de privatizaciones

127 Fernando Agüero, **Industria** (febrero-marzo 1991), p.3.

128 **El Mercurio**, 22 y 23 de junio y 10 de diciembre de 1991.

especialmente en «empresas que por la naturaleza de su actividad, la administración del Estado envuelve una pérdida de eficiencia y rentabilidad». Las privatizaciones serían así la única manera de mantener en el futuro un gasto social financiado.¹²⁹

La paralización de las privatizaciones fue definida por algunos sectores empresariales como una «contrarrevolución silenciosa». La situación terminó revirtiéndose debido a la precaria situación financiera de algunas empresas estatales. Pero bajo el liderazgo del «eje estatista» del equipo económico de gobierno, radicado en CORFO y algunos sectores socialistas, se optó por hacer participar al sector privado a través de concesiones. Con esta solución, la Concertación postergó una definición de fondo debido a discrepancias internas sobre el papel del Estado en una economía social de mercado.

Los empresarios y la clase política

Para la clase política, especialmente los sectores de oposición al gobierno militar, aceptar una economía de mercado y adaptarse a un Estado disminuido resultaba más fácil en el discurso que en la práctica. Ya comenzada la nueva etapa democrática, los parlamentarios perciben que su base de poder en el aparato del Estado es muy reducida y ven mermada la utilización de esos recursos para mantener o capitalizar un mayor apoyo electoral en el futuro. Para solucionar muchos de los problemas sociales de sus respectivas áreas o aquellos de tipo clientelístico a los cuales todavía se encuentran sujetos, los nuevos representantes carecen de iniciativa legislativa, no manejan información acerca de las principales variables económicas, y su acceso a los disminuidos recursos y servicios que puede proveer el Estado está en manos de los técnicos de gobierno.

Los parlamentarios se encuentran, además, en desigualdad de condiciones en términos de la asesoría técnica con que cuentan para enfrentar la tarea de legislar, comparado con el acervo de información y análisis especializado que producen los equipos técnicos de las organizaciones empresariales. Por otro lado, su dependencia del Ejecutivo es también notoria, ya que dada la complejidad de muchas iniciativas legislativas, sólo el Ejecutivo cuenta con los técnicos y el conocimiento especializado, dándole una clara ventaja por sobre los parlamentarios.¹³⁰

129 **El Mercurio**, 7 de julio de 1991; **Estrategia**, 13 de mayo de 1991, pp. 22-23.

130 Sobre este punto, ver Alfredo Rehren, «Comentario al Discurso del Presidente de la Cámara de Diputados» (pronunciado el 4 de Julio de 1991 en homenaje a los 180 años del Primer Congreso Nacional), en **Política** 27 (Septiembre de 1991), pp. 187-189.

En regiones los parlamentarios deben recurrir a la empresa privada para articular muchas de las demandas a las que están sujetos, lo que crea una dependencia no deseada y políticamente vulnerable. Es común encontrar allí una estrecha relación de intercambio de ideas acerca de los problemas de cada zona entre la bancada parlamentaria y dirigentes o empresarios regionales. Esta situación ha llevado a establecer un significativo cambio en las posiciones de poder que políticos y empresarios sostuvieron en el pasado, y una inversión en la relación de dependencia existente entre ellos. Mientras en la democracia pre-autoritaria los empresarios locales acudían ante diputados y senadores con sus problemas para gestar alguna solución a nivel nacional, hoy en día, en la nueva democracia capitalista, los parlamentarios recurren a los empresarios locales y/o regionales para que estos los ayuden a buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Esta situación, sumada al poder que tienen los grupos empresariales para financiar campañas electorales y al buen acceso a los niveles técnicos del Ejecutivo, resulta en extremo preocupante para muchos parlamentarios.

A los empresarios les correspondió seguir mostrando las bondades de un sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad de emprender, el libre comercio y el rol protagónico e insustituible de la iniciativa individual. Jorge Prado, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex Ministro de Agricultura del gobierno militar, declaraba en noviembre de 1990 y luego de casi ocho meses de la administración Aylwin que

del Estado esperamos nos proporcione un entorno institucional que nos permita desplegar todo nuestro potencial creativo, preservando un clima de irrestricto respeto a la propiedad privada, al libre ejercicio de la facultad de emprender y de disponer de los frutos del esfuerzo personal, todo ello en el contexto de una política oficial de decidido respaldo a la acción creativa de los individuos.¹³¹

Esta visión fue reforzada por las palabras de Manuel Feliú al dejar el cargo de presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio el 17 de diciembre de 1990: «durante este período logramos disipar muchas incertidumbres, resolver o neutralizar problemas y ganar autoconfianza en nuestras propias potencialidades como empresarios y como agentes del progreso social». Agregaba que la economía social de

131 Jorge Prado, Presidente de la S. N. A., en el discurso inaugural de FISA 1990, **El Campesino**, noviembre 1990, pp. 22-23.

mercado ya formaba parte de la cultura política de los chilenos y señalaba su descontento ante el aumento del tamaño del Estado y el fin de las privatizaciones.¹³²

Durante el primer año de gobierno de la Concertación, los empresarios chilenos comprendieron y asimilaron el papel que debían jugar. Fuertes en sus ideas y libres de toda presión política, no sólo se limitaron a defender el modelo económico legado por el régimen militar, sino que además, trabajaron para que la ideología heredada pasara a formar parte de la cultura política de los chilenos, rechazando las críticas que los acusaban de recurrir al Estado cuando las cosas no marchaban bien. En esto contradijeron al propio Presidente de la República quien declaró que estaba consciente que el Estado debía intervenir en lo estrictamente necesario, pero que a menudo el sector empresarial no lo entendía, pues cuando les iba bien, el Estado no debía intervenir, y en caso contrario, pedían inmediatamente que lo hiciera.¹³³ En respuesta, los empresarios señalaron que era el gobierno quien no entendía el concepto contemporáneo de Estado regulador y no de Estado, juez y parte interesada.

La labor realizada por los empresarios durante el inicio del gobierno de la Concertación estuvo marcada por la desconfianza hacia las nuevas autoridades, la que fue correspondida por el gobierno. El resultado parece lógico luego de casi 17 años de autoritarismo, durante los cuales los empresarios se sintieron fuertemente identificados con el gobierno militar y fueron percibidos por la oposición como eventuales opositores a un régimen democrático.

CONCLUSIONES

Mientras los empresarios debían adecuarse a un nuevo contexto democrático caracterizado por la negociación y el compromiso en la formulación de las políticas públicas – lo que incluye la participación de numerosos actores sociales y políticos previamente excluidos del proceso de toma de decisiones – los partidos políticos debían acostumbrarse a un nuevo modelo económico y a un empresariado más agresivo, mejor organizado y convencido del éxito de su protagonismo histórico. Los asuntos públicos en la incipiente democracia capitalista están en manos de dos grupos de líderes: gobierno y empresarios. Ambos deben colaborar, aunque para hacer funcionar el sistema, el liderazgo político debe frecuentemente ceder ante el liderazgo empresarial.

132 Manuel Feliú, *Industria* (febrero-marzo 1991), p. 24.

133 Patricio Aylwin, *Estrategia*, 26 junio 1991, p. 16.

Como consecuencia de la disminución del rol del Estado y de la privatización de la economía logrados durante el régimen autoritario y de las características del proceso de transición chilena, el estilo de formulación de políticas públicas que se caracterizó como estatista y semi-corporativo hasta 1973, se transforma, en la nueva etapa democrática, en uno abiertamente más competitivo y pluralista: «El empresariado tiene claro que hoy tenemos una independencia entre lo político y económico mucho mayor que antes, y las decisiones políticas, si bien influyen en el desarrollo económico, no van a influir de la misma manera que antes. El Estado tiene hoy menos fuerza». ¹³⁴

La evolución de las relaciones entre el Gobierno de la Concertación con el empresariado se enmarcan así dentro del campo definido por el concepto de un Estado subsidiario y regulador por un lado, y por el otro, por un actor social que se percibe así mismo como motor del desarrollo y del crecimiento de la sociedad y que goza de un amplio reconocimiento social.

Sin embargo, a pesar de esta aparente mayor independencia entre lo político y económico, lo que más caracteriza esta nueva etapa democrática es una nueva interdependencia entre gobierno y empresariado. Por un lado están los empresarios que necesitan estabilidad a nivel macroeconómico y claridad en las reglas del juego para desarrollarse, y por otro lado un gobierno de coalición exitoso que intenta proyectarse políticamente más allá de su primera administración, pero que necesita crecimiento para enfrentar la pobreza y la presión social característica del post-autoritarismo. Para lograrlo, y ante un Estado empresario disminuido, el gobierno no tuvo más alternativa que recurrir a la empresa privada. Los temores manifestados por el sector empresarial en el sentido de que la reforma tributaria y la reforma laboral conducirían a una detención del crecimiento económico no llegaron a ser realidad y las opciones políticas del gobierno de la Concertación para proyectar su mandato por un nuevo período permanecieron abiertas.

Los empresarios reconocen que ha existido un cambio trascendente en el pensamiento económico de los líderes políticos y de las posiciones partidistas, y que tal como ellos experimentaron un proceso de renovación, también los partidos políticos se están renovando gradualmente. Así como el régimen autoritario obligó a la clase empresarial a abandonar su paternalismo y visión estatista de la economía, el funcionamiento exitoso del mercado en democracia ha producido a su vez importantes cambios en las orientaciones económicas de la clase política.

134 Manuel Feliú, *La Epoca*, 2 julio 1989.

Qué consecuencias tuvo el cambio en la posición de poder socio-político del empresariado en la organización tradicional del sector, debe determinarse con mayor precisión. Si bien han emergido nuevas instituciones de cúpula sectoriales que reflejan el cambio en la naturaleza y diversificación de las actividades empresariales, y otras han adquirido mayor relevancia, especialmente por su vinculación al mercado internacional, el liderazgo político ha seguido radicado en las organizaciones tradicionales. Los Comités Cívicos y los Empresarios por la Democracia fueron fenómenos fugaces y aislados de la transición. Pero instituciones como la Cámara de la Producción y del Comercio, la SOFOFA y en menor medida la SNA, continúan ejerciendo el liderazgo del empresariado, ya sea ante el gobierno directamente, o a través de los partidos políticos y el Congreso. Las otras organizaciones —la Cámara Nacional del Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la SONAMI y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras— representan intereses especializados, pero tienen una fuerte gravitación en la formulación de las políticas sectoriales.

Si bien las organizaciones empresariales son consultadas por los partidos políticos en numerosas ocasiones y algunos empresarios participan en comisiones al interior de ellos, en general el empresariado muestra un alto grado de independencia con respecto a la clase política. Esto resulta de vital importancia para analizar la evolución de las deterioradas relaciones empresarios-derecha y su vinculación con la izquierda renovada. Según Eugenio Heiremans, hasta antes de 1973 «los empresarios parecíamos el monito del organillero: bailábamos al son de la música que nos tocaba el gobierno de turno». Ahora, según Fernando Agüero, «queremos bailar, pero eligiendo nosotros la pareja», analogía que sintetiza certeramente el cambio en la posición de poder del empresariado en la transición y consolidación de la democracia en Chile.¹³⁵

135 *Revista Industria*, N° 1 (febrero-marzo, 1990), p. 16.